



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO



TESIS

*“EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR
LUCRO Y SU DOBLE CRIMINALIZACIÓN CON
LA DACIÓN DEL DELITO DE SICARIATO”*

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

AUTORA: MG. ANITA ESPERANZA CABREJOS BARRIOS

LAMBAYEQUE – PERÚ, ABRIL 2018

TESIS
EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO
Y SU DOBLE CRIMINALIZACIÓN CON LA
DACIÓN DEL DELITO DE SICARIATO.

Mg. Cabrejos Barrios, Anita Esperanza
AUTORA

Dr. Hernández Rengifo, Freddy Widmar
ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” para optar el Grado Académico de **DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA.**

Aprobado por:

Dr. MIGUEL ARCÁNGEL ARANA CORTÉZ
PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO
SECRETARIO DEL JURADO

Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
VOCAL DEL JURADO

Lambayeque, Abril 2018.



AGRADECIMIENTO

A Dios padre, que siempre está a mi lado, me guía, guarda y da fortaleza para continuar día a día y a mi madre celestial, la Virgen María, que siempre intercede por mí ante Dios padre.

Agradezco de forma muy especial al Dr. FREDDY W. HERNÁNDEZ RENGIFO por su apoyo, sugerencias para la redacción, ejecución y culminación de la tesis.

Anita Esperanza.



DEDICATORIA

Dedico de forma muy especial a mis progenitores, Sr. José Orlando Cabrejos Relaiza y a mi querida madre Sra. Esperanza Barrios de Cabrejos, por su constante apoyo, sugerencias para seguir por la senda correcta.

A mis hermanos Aleida, Glenda, Eliana y Sergio, por su colaboración y apoyo incondicional.

Anita Esperanza.

RESUMEN

El principal objetivo de la presente investigación es determinar si el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, ha sido nuevamente criminalizado con la dación del artículo 108°-C del citado código sustantivo, que contiene el delito de SICARIATO, generando un problema de tipificación y de sanción de los órganos jurisdiccionales. Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas – explicativas, es decir, su tipo de análisis es en su mayoría cualitativo, aunque puede adquirir cierto manejo cuantitativo al utilizar datos estadísticos; además plantean hipótesis explicativas al problema planteado mediante el cruce de variables dependientes (variables del problema), variables intervinientes (variables de la realidad) y variables dependientes (marco referencial). Los resultados demuestran que hay relación entre las variables estudiadas. Finalmente se puede concluir que el tipo penal de Homicidio Calificado por Lucro ha sido doblemente criminalizado con la dación del delito de Sicariato, pues en ambos, el sujeto activo es movido por un fin de lucrativo, vale decir, que ejecuta el asesinato del sujeto pasivo, con el afán de beneficiarse económicamente, siendo que, en algunos casos, no sólo se beneficia él, sino que también el tercero que lo haya encomendado con la misión criminal. Debe tomarse en cuenta que la dación reciente del tipo penal de Sicariato, responde a una respuesta apresurada del Estado, el cual, sin ningún planeamiento adecuado o planificación de una verdadera política criminológica, viene incrementando el catálogo punitivo peruano, desmedidamente, sin ningún criterio serio y analítico para la creación de nuevos tipos penales, olvidando con ello, la vigencia plena del Principio de Ultima Ratio o de Subsidiariedad del Derecho Penal, generando principalmente inseguridad jurídica en la administración de justicia.

SUMMARY

The main objective of the present investigation is to determine if the offense of HOMICIDE QUALIFIED FOR PROFIT, foreseen and sanctioned in the article 108 ° clause 1 of the Penal Code, has been again criminalized with the dación of article 108 ° -C of the aforementioned substantive code, which contains the crime of SICARIATO, generating a problem of typing and sanctioning the jurisdictional bodies. This study is part of descriptive - explanatory research, that is, its type of analysis is mostly qualitative, although it may acquire some quantitative management when using statistical data; They also propose explanatory hypotheses to the problem posed by crossing dependent variables (problem variables), intervening variables (reality variables) and dependent variables (referential framework). The results show that there is a relationship between the variables studied. Finally it can be concluded that the criminal type of Homicide Qualified for Profit has been double criminalized with the dation of the crime of Sicariato, because in both, the active subject is moved by a lucrative purpose, that is, that executes the murder of the passive subject, with the desire to benefit economically, being that, in some cases, not only benefits him but also the third party that has entrusted him with the criminal mission. It must be taken into account that the recent dacrimation of the Sicariato type of crime, responds to a hasty response from the State, which, without any adequate planning or planning of a true criminological policy, has increased the Peruvian punitive catalog, disproportionately, without any serious criteria and analytical for the creation of new criminal types, thus forgetting the full validity of the Ultima Ratio or Subsidiarity Principle of Criminal Law, generating mainly legal insecurity in the administration of justice.

RESUMO

O principal objetivo desta investigação é determinar se o crime de homicídio qualificado LUCROS, uma ofensa punível ao abrigo da secção 108, inciso 1, do Código Penal, foi novamente criminalizados com a promulgação do artigo 108 ° C do que o código substantivo, que contém o crime de SICARIATO, gerando um problema de tipagem e sancionando os órgãos jurisdicionais. Este estudo faz parte da pesquisa descritivo - explicativa, ou seja, seu tipo de análise é em sua maioria qualitativa, embora possa adquirir algum gerenciamento quantitativo quando se utiliza dados estatísticos; Eles também propõem hipóteses explicativas ao problema colocado pelo cruzamento de variáveis dependentes (variáveis-problema), variáveis intervenientes (variáveis de realidade) e variáveis dependentes (referencial). Os resultados mostram que existe relação entre as variáveis estudadas. Finalmente, pode-se concluir que o delito de Primeiro Grau Murder para o lucro foi duplamente criminalizados com a promulgação do crime de Sicariato, porque tanto o sujeito ativo é movido por um tão lucrativo, isto é, a execução do assassinato do contribuinte, com o desejo de se beneficiar economicamente, sendo que, em alguns casos, não só o beneficia, mas também o terceiro que lhe confiou a missão criminal. Note-se que a recente promulgação do crime de Sicariato responde a uma resposta precipitada por parte do Estado, que, sem qualquer planejamento adequado ou a planejar uma política criminal real, tem vindo a aumentar o catálogo punitiva peruana, desordenadamente, sem qualquer critério sério e analítico para a criação de novos crimes, esquecendo-se, assim, toda a força do Princípio da subsidiariedade Rácio Ultima ou a lei criminal, principalmente gerando insegurança jurídica na administração da justiça.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad en nuestro país hemos podido advertir una serie de eventos criminales (robos agravados, asaltos, sicariatos, entre otros) que día a día se vienen incrementando de manera preocupante en nuestra sociedad, eventos que se habrían originado por una serie de causas, que en realidad no han sido determinadas o definidas de manera adecuada, pues podrían ir desde la formación en valores recibida en los hogares hasta la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, provenientes precisamente de hogares disfuncionales, y es en razón a esta falta de oportunidades laborales es que se generaría desempleo y ello a su vez conllevaría a la búsqueda de dinero fácil con el cual sobrevivir o llevar el día a día.

El Estado Peruano, en un intento más por mermar la crisis de la creciente ola delincriminal en nuestra sociedad, en el año 2015 promulgó el Decreto Legislativo N° 1181, publicado en el Diario “El Peruano” el día 27 de julio de 2015, precisamente, emitida en el marco de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Y es dicha ley, la que introdujo el artículo 108°-C del Código Penal, definiendo al Sicariato como *“aquel que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole”*.

Es decir, por mucho tiempo, el Sicariato ha sido sancionado como delito de homicidio calificado por lucro, un tipo de homicidio donde el móvil del asesino es obtener dinero u otro beneficio esencialmente económico, el ejemplo clásico sería el que mata a otro para obtener una herencia, un beneficio patrimonial, o por encargo o acuerdo a cambio de una ventaja económica. Entonces lo que, se habría pretendido, con la dación del delito de Sicariato, es darle una regulación propia, vale decir, como una figura autónoma.

En virtud a lo anterior, podemos señalar sin lugar a dudas que, si el delito de Sicariato, es considerado como una figura autónoma, siendo esa la razón por

la cual se emitió el Decreto Legislativo N° 1181 que lo creó; entonces, el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del citado Código Sustantivo, no tendría razón para seguir existiendo, más aun cuando conforme se advierte, de los reportes estadísticos recabados de las instituciones públicas encargadas de administrar justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), prácticamente dicho delito de Homicidio Calificado por Lucro, no viene siendo aplicado en los últimos años.

Debemos tener en cuenta también que, a raíz de la incorporación del delito de Sicariato en nuestro catálogo punitivo, trajo consigo la creación de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, las cuales a la fecha vienen investigando a sendas organizaciones criminales que habrían estado enquistadas, incluso en empresas emblemáticas de la zona norte, como la empresa Agropucalá, y que si bien a la fecha aún no se han obtenido sentencia alguna, ello se debe a que los casos se encuentran en las primeras etapas del proceso penal (diligencias preliminares y formalización de la investigación preparatoria), pero se apuesta por que se obtengan sentencias emblemáticas, para bien de nuestra sociedad.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA.....	iv
RESUMEN	iv
SUMMARY	vi
RESUMO	vii
INTRODUCCIÓN	viii
CAPÍTULO I	13
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	13
1.1. Realidad Problemática.	13
1.2. Planteamiento del Problema.	14
1.3. Formulación del Problema.	16
1.4. Justificación e importancia del estudio.....	16
1.5. Hipótesis.....	17
1.6. Objetivos.	18
1.6.1. General.	18
1.6.2. Específicos.....	18
1.7. Población y muestra.....	19
1.7.1. Población	19
1.7.2. Muestras	19
1.8. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.	19
1.8.1. Materiales	19
1.8.2. Técnicas de recolección de datos	20
1.8.3. Métodos y procedimientos para la recolección de datos.....	20
CAPÍTULO II	22
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	22
2.1. Legislación Internacional.....	22
2.2. En el Perú.	24
CAPÍTULO III	36
EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO	36
3.1. Cuestiones Generales.....	36
3.2. Bien jurídico protegido.	40

3.3. Elementos que configuran el tipo.....	42
3.3.1. Sujetos activo y pasivo.....	42
3.3.2. Comportamiento típico.	42
3.3.3. Tipo subjetivo.....	43
3.3.4. Comportamiento típico y fundamento de la agravación.	44
CAPÍTULO IV.....	45
EL DELITO DE SICARIATO.....	45
4.1. Cuestiones Generales.....	45
4.2. Comportamiento típico y fundamento de la agravación.	46
4.3. Elementos típicos.....	47
4.3.1. Acción Típica.....	47
4.3.2. El sicario.	48
4.3.3. El encargante.....	49
4.3.4. El intermediario.	49
4.3.5. El acuerdo criminal.....	49
4.3.6. Ventaja o beneficio económico o de cualquier otra índole.	50
4.3.7. Tipicidad subjetiva.....	51
4.3.8. Finalidad o propósito de obtener el beneficio.....	51
4.3.9. Supuestos agravados.	53
4.4. Pronunciamientos de la Corte Suprema de la República.....	59
CAPÍTULO V.....	64
DOBLE CRIMINALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS EN ANÁLISIS.....	64
5.1. Cuestiones Generales.....	64
5.2. Análisis del tema planteado.	66
5.3. Análisis de la jurisprudencia citada.	70
5.4. Seguridad jurídica.	77
CONCLUSIONES	82
RECOMENDACIONES	84
BIBLIOGRAFÍA	87
ANEXOS	89

INDICE DE ANEXOS

ANEXO I. Crean fiscalías superiores supraprovinciales y provinciales en el marco de la implementación de la Ley N° 30077 que dispuso la entrada en vigencia a nivel nacional de Código Procesal Penal para delitos de crimen organizado RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS N° 084-2014-MP-FN-JFS.....	89
ANEXO II. Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2166-2016-MP-FN...	91
ANEXO III. Reporte de delitos registrales por distrito fiscal del 01/10/2015 al 19/09/2017.....	94
ANEXO IV. Reporte detallado de carga fiscal por fiscalía al 23/02/2018 a horas 09:23AM.....	96

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Realidad Problemática.

A efectos de poder explicar el por qué se considera que cuando el legislador incluyó en nuestro actual Código Penal, la figura delictiva del SICARIATO (artículo 108°-C del C.P.) estaba sobre criminalizando la figura ya existente del HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO previsto en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal; resulta necesario traer a colación la realidad actual peruana, la cual ha sucumbido en un ambiente total de inseguridad ciudadana, que ha conllevado a que los legisladores peruanos, de manera desmesurada e indiscriminada, creen diversos tipos penales, se aumenten o modifiquen las penas ya establecidas, con la finalidad de intentar “COMBATIR LA DELINCUENCIA” y de cierta forma tratar de cumplir los fines de la pena, que son el de cumplir una función preventiva, protectora y resocializadora. Así tenemos que dichas creaciones o modificaciones legislativas en los últimos años han sido diversas, y que implicaron la dación de LEYES como: Ley N° 30054, Ley N° 30076, Ley N° 30077, Ley N° 30111, Ley N° 30124, Ley N° 30171, Ley N° 30253, Ley N° 30327, Ley N° 30364, Ley N° 30424, D. Leg. N° 1181, D. Leg. N° 1182, D. Leg. N° 1187, D. Leg. 1237, D. Leg. N° 1246, entre otros.

Dicho ello, tenemos que lo que la realidad actual nos presenta es la existencia de suficientes conductas punibles para poder castigar de manera adecuada a quien trasgrede el ordenamiento social y jurídico; y particularmente a quienes matan a una persona por encargo después de haber recibido una suma de dinero por parte de un tercero, sea cual fuera el móvil para ello, así tenemos el de celos, ajuste de cuentas, envidia, codicia, entre otros móviles, es decir, cualquier motivo será suficiente para que aquél que quiere acabar con la vida de una persona, para poder contratar a otra y ofrecerle una suma de dinero

considerable y aceptable a sus “ojos” a fin de que ejecute la tarea encomendada: MATAR A UNA PERSONA POR LUCRO.

Ahora bien, como se ha podido notar a través de los diversos medios de comunicación peruanos, sea televisión, radio, internet, constantemente se escucha noticias relacionadas con la muerte de personas que se encontraban por ejemplo, en un restaurante, en una cabina de internet, incluso en la puerta de su casa, circunstancias en las que aparecía, generalmente, dos personas a bordo de una moto lineal, y una de ellas empuñando un arma de fuego, dispara a quema ropa a su víctima, logrando su cometido; entonces, cuando se logra capturar a dichos sujetos activos, suelen referir que han sido contratados por determinada persona para ejecutar tal acto delictivo a cambio de una suma de dinero.

Los actos antes mencionados, se han venido incrementando a lo largo de los últimos años, por lo que el legislador, en la creencia de frenar la comisión de tales conductas delictivas, tuvo la idea de “introducir” un nuevo tipo penal para tipificarlas (como si en realidad no estuviese contenido en nuestro ordenamiento penal vigente), así pues introdujo la figura del **SICARIATO** que se encuentra previsto en el artículo 108°C, mediante la dación del Decreto Legislativo N° 1181 del 27 de julio de 2015. Sin embargo, ya el mismo artículo 108° del Código Penal, ha establecido la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR LA CAUSAL DE LUCRO, el cual creemos que es suficiente para penalizar los homicidios que se cometen por encargo a cambio de una suma de dinero, que es lo mismo que el sicariato, conforme lo plantearemos a continuación.

1.2. Planteamiento del Problema.

Teniendo en cuenta lo señalado en el punto anterior, podemos manifestar que en nuestro ordenamiento jurídico se estaría dando una DOBLE CRIMINALIZACIÓN de las conductas punibles, vale decir que si ya en nuestro actual Código Penal, existe en el artículo 108° inciso 1 del delito de

HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO, el cual señala que: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por ferocidad, codicia, **lucro** o por placer. 2. Para facilitar u ocultar otro delito. 3. Con gran crueldad o alevosía. 4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.”; cabe preguntarnos, entonces, **porqué se introdujo el artículo 108°-C que prevé:** “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. 2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. 3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. 4. Cuando las víctimas sean dos o más personas. 5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107° primer párrafo, 108°-A y 108°-B primer párrafo. 6. Cuando se utilice armas de guerra.”; además ha de considerarse la existencia del tipo penal descrito en el artículo 108°-D sobre la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, el cual, si bien no es materia de desarrollo en el presente proyecto de investigación, resulta adecuado ser anotado a efectos de lograr un mayor análisis.

Ante ello, consideramos que en realidad el HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO y el SICARIATO resultan ser el mismo tipo penal, con la única diferencia de que, en este último, se ha establecido diversos supuestos específicos para su configuración; sin embargo, hubiera bastado, por ejemplo, modificar el tipo penal primigenio, añadiendo los supuestos incorporados en el tipo penal del 108°-C, o en todo caso, derogar el primer delito antes descrito.

Debe tenerse en cuenta que consideramos que la DOBLE CRIMINALIZACIÓN de las conductas penales en estudio, conlleva a la afectación del derecho fundamental del debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva; en razón a que dada la similitud total entre ambas figuras delictivas, puede aplicarse erróneamente un tipo penal en lugar de otro, más aun si tenemos en cuenta que a la fecha aún no existen condenas obtenidas por delito de Sicariato, precisamente por ser un tipo penal de relativa novedad, y que de aplicarse, los operadores de justicia, se inclinarían a invocar la pena abstracta conminada para el delito de Homicidio Calificado por lucro, que es no menor a quince años, en lugar a la del Sicariato, cuya pena abstracta es no menor a veinticinco años, pudiéndose incluso alegar la plena vigencia del Principio de Proporcionalidad de las Penas, previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal.

1.3. Formulación del Problema.

¿El delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, ha sido nuevamente criminalizado con la dación del artículo 108°-C del mismo código sustantivo, que contiene el delito de SICARIATO, y ello ha conllevado a la existencia de un problema de tipificación y de sanción a los órganos jurisdiccionales, generándose inseguridad jurídica?

1.4. Justificación e importancia del estudio.

Ahora bien, planteada la interrogante debemos ahora señalar que el presente estudio investigativo resulta necesario a fin de analizar por qué se considera que existe una doble criminalización de la conducta de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO con el delito de SICARIATO, y ello es por cuanto, consideramos que el Estado Peruano ha visto como única manera de combatir y enfrentar la ola delincencial actual, la dación de sendas leyes y decretos legislativos; sin detenerse a analizar cuáles son las verdaderas causas que estarían produciendo dicha creciente ola delincencial.

Creemos que la solución de modificar constantemente el Código Penal, con la creación de nuevas conductas delictivas, o agravar las penas, no es la forma más adecuada de lograr revertir la delincuencia en el Perú, toda vez que si bien la sociedad evoluciona, no quiere decir que con ello necesariamente las conductas penales cambien en esencia, sino todo lo contrario, siguen siendo las mismas, lo que cambia son las modalidades, vale decir, MATAR A UNA PERSONA es quitarle la vida, hacer que deje de funcionar sus órganos vitales debido a la producción de un daño o lesión irreparable e irreversible en su integridad física, haciendo uso de cualquier forma o medio, y precisamente son éstos (formas o medios) los que han originado que se den las modalidades que establece nuestro código penal actual, partiendo del tipo BASE del artículo 106: Homicidio Simple, siguiéndole los tipos establecidos en el artículo 107°, 108°, 109° y siguientes del citado código.

En ese orden de ideas, debemos señalar además que el presente estudio encuentra su justificación fundamental en el hecho de que consideramos que existe una doble criminalización de la conducta penal prevista y sancionada en el artículo 108° del Código Penal, con las establecidas en el artículo 108°-C (incluso el 108°-D) del código acotado, habiéndose incorporado de manera innecesaria dicho tipo penal, cuando en esencia se trata del mismo tipo penal, debiéndose en todo caso haberse procedido a considerar agravantes del tipo penal de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO o inclusive proceder a derogar tal modalidad a efectos de ser incorporada de manera independiente y no de manera duplicada a nuestro entender.

1.5. Hipótesis.

Si se deroga el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, se evitaría su doble criminalización con el tipo penal de SICARIATO previsto y sancionado en el artículo 108°-C del citado código sustantivo, que ha generado un problema de tipificación y de sanción a los órganos jurisdiccionales, conllevando con ello a lograr un ambiente de seguridad jurídica.

1.6. Objetivos.

1.6.1. General.

Determinar si el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, ha sido nuevamente criminalizado con la dación del artículo 108°-C del mismo código sustantivo, que contiene el delito de SICARIATO, conllevando a la creación de un problema de tipificación y de sanción a los órganos jurisdiccionales, acarreando inseguridad jurídica.

1.6.2. Específicos.

- Analizar la aplicación del tipo penal del delito de Homicidio Calificado por Lucro y sus implicancias en la realidad actual, específicamente en el distrito fiscal de Lambayeque.
- Analizar la aplicación del tipo penal del delito de Sicariato y sus implicancias en la realidad actual, específicamente en el distrito fiscal de Lambayeque.
- Comparar el tipo penal de homicidio calificado por lucro con el tipo de sicariato a fin de determinar sus semejanzas estructurales.
- Considerar la jurisprudencia nacional, incluso, internacional, que ya se ha pronunciado respecto a las similitudes de los delitos de homicidio calificado por lucro y el delito de sicariato.
- Proponer la derogatoria del tipo penal de homicidio calificado por lucro previsto en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, ante la dación del delito de sicariato previsto en el artículo 108°-C del referido código sustantivo, a fin de generar con ello seguridad jurídica.

1.7. Población y muestra.

1.7.1. Población

Se estudiarán las sentencias sobre delito de homicidio por lucro, y sentencias del delito de sicariato entre el período comprendido en Agosto 2015 a Agosto 2017, expedidas por los juzgados penales (colegiados) de la sede Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, se entrevistarán a juristas especializados en materia penal que hayan investigado, publicado un libro o artículo sobre la materia. Se encuestarán a Jueces Penales, Fiscales Penales y abogados penalistas que hayan llevado casos de homicidio por lucro o sicariato.

1.7.2. Muestras

Teniendo en cuenta la población de las sentencias sobre delito de homicidio por lucro, y sentencias del delito de sicariato se tomará como muestra un porcentaje significativo entre el 20% al 100%, teniendo en cuenta la cantidad de sentencias que se encuentren, dentro del período comprendido entre el período comprendido en Agosto 2015 a Agosto 2017, expedidas por los juzgados penales (colegiados) de la sede Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Asimismo, teniendo en cuenta la población, se entrevistarán a juristas especializados en materia penal que hayan investigado, publicado un libro o artículo sobre la materia. Se encuestarán a Jueces Penales, Fiscales Penales y abogados penalistas que hayan llevado casos de homicidio por lucro o sicariato.

1.8. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.8.1. Materiales

- Lap top
- Conexión a internet
- Revistas jurídicas
- Libros de derecho penal
- Fichas bibliográficas

- Grabador de voz

1.8.2. Técnicas de recolección de datos

- DOCUMENTAL: Fichaje Bibliográfico, en razón de que se utilizará como instrumentos fichas textuales y de resumen, recurriendo como fuentes a libros especializados, jurisprudencia y documentos oficiales, a fin de realizar un análisis, comentarios e interpretación documental de cada uno de los objetos en estudio: Norma penal de delito de Homicidio calificado por lucro y Norma penal de delito de Sicariato.
- ENTREVISTA: Para lo cual se utilizará como instrumento una guía de entrevista, permite profundizar los aspectos más interesantes del tema a investigar, aplicado sólo a un pequeño número de informantes. Y en el presente caso, se entrevistará al Titular del Despacho de la Fiscalía Superior a cargo de los Casos de Delitos de Crimen Organizado, en el distrito de Lambayeque.

1.8.3. Métodos y procedimientos para la recolección de datos

- Respecto al método general para la recolección de datos, se debe precisar que se utilizará el método DEDUCTIVO, por cuanto, el objeto de estudio tiene que ver con la co-existencia de dos normas que se consideran semejantes, y precisamente la investigación está destinada a determinar la existencia de tales semejanzas, debiendo analizar cada una de ellas, a fin de poder arribar a que sólo debe permanecer vigente una de ellas.
- Respecto al método específico se utilizará el método ESTADÍSTICO con la finalidad de obtener cuadros estadísticos de la institución pública: Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lambayeque, a fin de obtener información sobre la aplicación en las investigaciones de las dos normas penales en estudio, así como, determinar cuál de las normas es la que se viene aplicando con mayor frecuencia.

- Respecto a los procedimientos para la recolección de datos, se utilizará: Fotocopiado, Apuntes, Fotografiado, Grabaciones y Base de datos del Sistema Informático del Distrito Fiscal de Lambayeque: Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas Corporativas, básicamente.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

2.1. Legislación Internacional.

- La Declaración Universal de Derechos Humanos, ha establecido en su artículo 3° lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido en su artículo 4° lo siguiente: “Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Ha establecido que el “derecho a la vida es de carácter fundamental, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los demás derechos carecen de sentido” (CASO HUILCA TECSE Vs. PERÚ, 2005). También en la misma sentencia ha manifestado lo siguiente: “El cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esta protección integral del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal, y a quienes deban resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas.”.

- Así, la jurisprudencia colombiana señala que la agravante de precio requiere: a) en cuanto a la actividad, el recibir una merced de tipo económico para la ejecución del hecho; b) en cuanto a la culpabilidad, que la merced influya como causa motriz del delito, mediante el pactum scaeleris remuneratorio, afectándole tanto al que entrega como al que recibe el precio, y con operatividad inductoria en virtud de las proyecciones recíprocas que tiene la codelincuencia; c) en cuanto a la antijuricidad, que la merced tenga la suficiente intensidad para ser repudiada por el ente social, en virtud de la inmoralidad y falta de escrúpulo que se deja sentir ante la misma.

- El maestro MUÑOZ CONDE (partidario de la teoría del dominio del hecho), es de la opinión que la figura de la coautoría se adapta mejor que otras categorías de autoría y participación a algunas formas de realización del delito, en las que el cerebro o principal responsable no está presente en la ejecución, pero lo controla y decide su realización, al no existir para la autoría la intervención de todos los coautores en la ejecución del delito, bajo el entendimiento de que el requisito de la co-ejecución no es más que la

consecuencia de una teoría objetiva – formal que ya se ha mostrado insuficiente, incluso para explicar el concepto mismo de la autoría; por consiguiente, dentro de una coautoría no solo cabe una coautoría ejecutiva, total o parcial, sino también otras formas de realización conjunta de delito en las que alguno o algunos coautores, a veces los más importantes, no están presentes en la ejecución.

2.2. En el Perú.

2.2.1. La Constitución Política, en su artículo 2° inciso 1, establece: “Toda persona tiene derecho a la vida”. Así pues, tal derecho, constituye el pilar fundamental de los demás derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, resultando en la presente investigación el bien jurídico protegido. El autor HURTADO POZO (HURTADO POZO, 1993), señala que el derecho penal protege ampliamente este bien jurídico, en razón de la natural vulnerabilidad humana. Los límites de la protección de la vida humana son muy discutidos. El límite mínimo puede ser determinado por los siguientes criterios: 1° Desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, 2° Desde la anidación del óvulo fecundado en el útero. En la ciencia penal peruana es dominante el segundo criterio (desde la anidación del óvulo fecundado en el útero), el cual se le considera importante no solamente por la certeza que conlleva dicha noción, sino que permite mayor claridad en la diferenciación entre medios anticonceptivos y abortivos. Por otro lado, se diferencia entre interrupción de la vida humana dependiente (aborto) de la vida humana independiente (homicidio, parricidio, asesinato, homicidio por emoción violenta, infanticidio, homicidio a petición, instigación y ayuda al suicidio, homicidio por negligencia). Existen discrepancias sobre el inicio de la vida humana independiente, así se plantea que: (i) Se inicia desde el parto. (ii) Se requiere la total separación del claustro materno. Para definir este aspecto se toma como referencia lo señalado en el artículo 110° del Código Penal (infanticidio) que utiliza la expresión "durante el parto". El concepto de que la protección de la vida humana concluye con la muerte ha tenido diversas interpretaciones, pero actualmente se entiende por

muerte la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. En la doctrina nacional se considera mayoritariamente que la vida humana independiente se inicia desde el parto.

2.2.2. La Academia de la Magistratura (MAGISTRATURA, 2014) en su publicación sobre delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, señala que el legislador en el artículo 108° del Código Penal se han considerado varias modalidades de homicidio calificado, dentro de ellas se encuentra las que se refieren al móvil, dentro de la cual se encuentra a su vez el Homicidio por ferocidad: Ferocidad es inhumanidad en el móvil, matar por motivo fútil, matar sin causa aparente o causa insignificante, matar por el solo placer. La ferocidad es una especial motivación que agrava la culpabilidad del agente. Ejemplo: quien mata a una criatura enferma, estrellándola violentamente contra la pared, por mortificarle el llanto. Homicidio por lucro: Se refiere a la codicia del sujeto activo, esto es el deseo inmoderado de riqueza, ganancia, provecho. Esta figura de homicidio calificado admitirá tanto: El caso de una motivación unilateral en el individuo que impulsa su voluntad hacia el beneficio como meta (ejemplo: matar para heredar) y el caso del mandato que implica la acción de otra persona (ejemplo: muerte causada por medio de un asesino asalariado que recibe orden para matar y lo hace por un precio). El lucro es una especial motivación que agrava la culpabilidad del individuo.

2.2.3. El autor José Luis Castillo Alva (ALVA, 2010): Señala que la vida humana, de manera genérica, junto a otras realidades adyacentes como la integridad corporal, es el bien jurídico protegido en el Título I del Libro II del Código Penal, referido a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Sin embargo, esta indicación dista mucho de ser exacta si se pretende encontrar el bien protegido en el homicidio, pues resulta evidente que en el Capítulo II del Título en mención, referido al aborto, también se protege a la vida humana. Tanto el homicidio y el aborto comparten un mismo bien jurídico: la vida humana. Por ello, resulta por lo menos impreciso sostener que solo en el homicidio se protege este bien jurídico. En ese sentido, se

tiene que, en opinión del autor en mención, para salvar tal insuficiencia es necesario aclarar que se trata de una vida humana ya formada, apta para nacer o que se encuentra en condiciones de vivir de manera autónoma y cuyo inicio de protección comienza con el acontecimiento biológico del parto. Ello supone reconocer a la vida humana como un proceso biológico continuo, pero que basándose en criterios jurídico – sociales se la valora de manera distinta, según su grado de desarrollo o relación. En nuestro ordenamiento jurídico penal esa valoración distinta comienza desde el momento del parto.

Ahora bien, siguiendo al autor, en el homicidio se tutela la vida humana ajena. Pues debemos tener presente que la vida humana, no solo es necesaria para la existencia del individuo como centro de interferencia intersubjetiva, sino es fundamento insustituible de la colectividad y la organización jurídica – política. La vida es la base física y bio – psíquica imprescindible en la construcción de la noción jurídica de la persona; por lo que al brindarse protección se tutela también a esta, aun cuando se tenga presente y reconozca la diversa definición civilista y su construcción eminentemente normativa.

En el Derecho histórico se reconocen a grandes rasgos dos modelos de regulación del delito de asesinato. El primero de origen italiano, atiende a la existencia o no del elemento psicológico respecto a la circunstancia de premeditación. Esta forma delictiva se contrapone al dolo de ímpetu que se cometía presa de un momento de cólera, ira o emoción del momento. Este sistema legislativo fue adoptado por el Código Penal francés de 1810 y difundido por las diversas legislaciones en las que ejerció particular influencia. El segundo modelo, de origen germánico, tomaba en cuenta la mayor disvaliosidad de la conducta desde el punto de vista ético – social en función de las condiciones del autor o su comportamiento externo, tal como ocurre con la muerte que se produce de manera encubierta, oculta o defraudando la lealtad debida. Lo mismo ocurría con el móvil de **lucro** o codicia.

2.2.4. Asimismo, el autor **Silvio Ranieri** (SILVIO, 1975) señala que el objeto jurídico en los delitos de daño contra la vida, es el interés del Estado en la incolumidad de la vida humana, considerada como bien fundamental e indispensable, para que sea posible la existencia de la convivencia social. Entonces el homicidio doloso es la muerte ilegítima, prevista y querida, de un hombre por parte de otro hombre, siendo los elementos constitutivos específicos: la conducta criminosa, el objeto material, el resultado y el dolo genérico. Básicamente, según el autor señalado en el numeral que antecede, la conducta se encuentra descrita en la expresión ocasionar la muerte cuyo objeto material es la persona física sobre la cual recae la mencionada conducta criminosa, y que posee el bien de la vida; por lo tanto, es la persona física, hombre o mujer, cualquiera que sea su edad o sus condiciones fisicoquímicas, o la raza, siempre que se encuentre viva, lo que implica el logro de un resultado que es la muerte de una persona, distinta del sujeto activo, que debe derivarse por nexo causal, de la conducta criminosa. De hecho se deduce que no es punible la muerte de uno mismo, ni siquiera en forma de tentativa, siendo su momento consumativo la verificación de la muerte.

2.2.5. Siguiendo con las reseñas de los autores, tenemos que el maestro **Alfonso Serrano Gómez** (SERRANO GOMEZ, ALFONSO y SERRANO MAÍLLO, ALFONSO, 2002) señala que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente, sujeto activo puede ser cualquiera, lo mismo que el sujeto pasivo, si bien hay que tener en cuenta lo expuesto para fijar el momento en que se considera que la persona tiene vida independiente a efectos de distinción con el delito de aborto. La acción viene determinada por el hecho de “matar a otro”, siendo necesario que entre la conducta exterior del sujeto encaminada a producir la muerte de otro (acción) y el resultado exista relación de causalidad, que ha de ser penalmente relevante. En opinión del autor que antecede el asesinato es la muerte de otra persona al concurrir en la ejecución alguna de las circunstancias de: alevosía, por precio recompensa o promesa, o con ensañamiento,

aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. En el caso que nos interesa, se tiene que en la legislación colombiana (a la cual pertenece el autor citado), se utilizó los términos de precio, recompensa o promesa, entonces para que la muerte de otro pueda concurrir esta circunstancia y dar lugar al asesinato es necesario un pacto entre quien ofrece y quien ejecuta los hechos. El contenido económico o la promesa del mismo ha de ser lo que desencadene la acción criminal. El pacto ha de ser anterior a la ejecución, se reciba el precio o se posponga en promesa de hacerlo.

2.2.6. Enmarcándonos en el autor nacional Tomás Galvéz y el autor Ricardo Rojas (GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO y ROJAS LEÓN, RICARDO CÉSAR, 2017), éstos sostienen que es bastante debatido el tema relativo a la autonomía del delito de asesinato, existiendo, sobre todo en nuestro medio, dos posturas al respecto, una que niega su autonomía y otra que la firma. Sin embargo, los autores adoptan la posición de postura de que el asesinato constituye un tipo derivado (cualificado) del tipo de homicidio, que por lo demás es la posición que ha asumido en forma unánime nuestros operadores jurisdiccionales cuando han tenido la oportunidad de pronunciarse; a partir de ello, se puede asumir que no tendría una autonomía propia; sin embargo, se puede apreciar que tiene características que le dan cierta identidad que lo diferencia del delito de homicidio simple, lo que justifica su configuración y tratamiento distinto.

En opinión del autor, el fundamento de agravación de esta circunstancia cualificante, reside en un mayor contenido de culpabilidad del proceso de motivación, que determina al sujeto a causar la muerte de alguien en atención al beneficio lucrativo que pretende alcanzar; con lo que evidencia un desprecio por la vida humana, a tal punto que la pone por debajo de su avaricia pecuniaria, revelando una personalidad especialmente peligrosa. Asimismo, el lucro perseguido por el homicida puede ser para sí o para un tercero, tal como lo admite la doctrina de modo unánime. En el caso de concurrencia de otros móviles, para calificar el homicidio, el móvil lucrativo

debe ser el preponderante para desencadenar la resolución delictiva del sujeto activo; por ello, no se presentará esta agravante cuando el agente antes del ofrecimiento, ya estaba decidido a realizar el hecho delictivo o este decide cometer la acción por otros móviles; pues, debe existir una relación o correspondencia directa entre el móvil y la muerte ocasionada.

Dicho autor, refiere que con la legislación anterior se consideraba que comete asesinato por lucro, tanto aquel que actuaba en virtud de un precio, promesa o recompensa económica a pedido de un tercero, así como aquel que actuaba unilateralmente a fin de alcanzar un provecho económico. Sin embargo, con el establecimiento del delito de “sicariato” de modo independiente en la legislación actual, el primer supuesto configurará delito de sicariato y solo el segundo será considerado en esta agravante: móvil de lucro. Esto es, solo se considera en esta agravante el caso en que el homicida actúa unilateralmente, sin un previo acuerdo ni indicación de otro (precio o recompensa). El agente actúa por el mismo impulsado por su propio apetito lucrativo.

Debe tenerse presente que no interesa que el agente obtenga realmente el beneficio económico (lucro) esperado o que su acción homicida necesariamente le asegure tal beneficio posterior; por cuanto, la agravación está en función de la mayor culpabilidad del agente al obrar con esta motivación, y no en función de las ventajas que en concreto obtuvo o pueda obtener. Sin embargo, la expectativa económica debe tener un sustento objetivo y real, es decir no debe ser fantasioso o inverosímil, por tal razón, no incurriría en asesinato por lucro, aquel que mata pensando que el enemigo de la víctima le dará una recompensa o que así obtendrá el premio en un evento en el que participa. No obstante, en este último caso (obtención del premio) puede configurarse la agravante si la víctima también participa en el evento o concurso y es la mayor competidora para ganar el premio, por lo que se la elimina con la finalidad de ganar el premio.

2.2.7. En opinión del autor **PEÑA CABRERA** (PEÑA CABRERA FREYRE, 2016), la cual compartimos, señala que la penalización autónoma del delito de Sicariato obedece más a una necesidad política y punitiva, que a motivos de político criminal, en tanto que el Homicidio por lucro cubría plenamente dicho afán incriminador, y ello por cuanto se tiende a también regular todas las actividades periféricas del autor, al haberse previsto expresamente que la misma pena se impone al que encarga, ordena o acuerda con el ejecutor del delito la muerte dolosa de la víctima. Se trata de una equivalencia punitiva de formas de participación delictiva (instigación), a la autoría, dejando de lado, que el artículo 24° del Código Penal, establece literalmente que el instigador es reprimido con la misma pena que el autor, esto llevado al supuesto de Sicariato por encargo.

Siguiendo tal postura, Peña Cabrera, cita a STRATENWERTH, al señalar que la planificación y organización de un delito ejecutado por varios deben fundamentar la coautoría, dicho a modo de ejemplo, aun cuando el organizador ya no esté durante la ejecución en comunicación telefónica con los autores: el plan predetermina la conducta del interviniente en el estadio de la ejecución, conforma los roles individuales y hace intervenir al organizador, por eso mismo, el dominio del hecho. El suministrar los instrumentos, armas, etc, o indicar las oportunidades para cometer el delito, por el contrario, no significa una decisión anticipada acerca de si será ejecutado el delito y, en su caso, de qué modo, por tanto, queda como mera complicidad. De forma de cómo se va a realizar el delito, por ello no deja en manos de los ejecutores la forma de realización típica, sino que de haber aportado una contribución que enlaza a las de la etapa ejecutiva, darán cuerpo material a su ejecución.

Ahora bien, conforme lo antes citado, debemos tener en cuenta que como toda figura delictual, el dolo en el aspecto anímico del agente, exige conciencia y voluntad de realización típica, para lo cual basta el dolo cognitivo, en cuanto al grado de cognoscibilidad suficiente de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado con aptitud de lesión al bien jurídico

tutelado. Es así que al factor anotado, el legislador ha añadido un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, en cuanto al propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, ajeno al dolo, que para dar por acreditada la materialidad del injusto en cuestión, no requiere ser verificado en el mundo fenomínico. Esto es, el factor desencadenante de la deliberación delictiva del autor, es la obtención de un beneficio económico o de cualquier otra índole, el cual es ofrecido por el mandante (insitgador) o dador de la orden delictiva; importa un estado psicológico que ha de ser comprobado a través de la prueba indiciaria.

En el delito de sicariato, es básica la existencia del pago de un precio, por el encargo criminal, de dar muerte a la víctima, puede darse por adelantado o luego de perpetrado el asesinato; debiendo quedar claro, que no resulta comprobar que el mandante o contratante, haya tenido la verdadera intención de pagar, pues ante su imposibilidad o la negativa a ello, igual el delito se habrá perfeccionado con la muerte dolosa del sujeto pasivo. Entonces la consumación se identifica, como todo delito de asesinato, con la muerte del ofendido, si esto no se logra, por motivos ajenos al autor, estaremos ante un delito tentado. Asimismo, el beneficio económico puede ser en favor directo del agente o para un tercero vinculado a éste, por ejemplo, que el dinero pactado sea entregado a la esposa o madre del Sicario.

2.2.8. También tenemos que el autor **RAMIRO SALINAS** (SALINAS SICCHA, 2010), respecto al delito de Homicidio Calificado o Asesinato por Lucro, señala que, se configura esta calificante cuando el agente produce la muerte de su víctima con el firme propósito y objetivo de obtener un provecho o ganancia patrimonial. Esto es, el sujeto activo actúa porque recibió o recibirá en un futuro, dinero de un tercero para poner fin a la vida de su víctima, o porque espera obtener una ganancia o provecho económico con su actuar ilícito al heredar los bienes del sujeto pasivo o cobrar un seguro de vida por ejemplo. En la doctrina generalmente

aceptada, refiere que el asesinato por lucro es entendido e interpretado en forma restrictiva como lo hace un gran sector de tratadistas foráneos. En efecto, Bramont Arias, Roy Freyre, Peña Cabrera, Bramont-Arias y García Cantizano y Javier Villa Stein, comentando el código derogado de 1924 los primeros y los otros haciendo dogmática del actual código sustantivo, enseñan que la fórmula es de carácter restrictivo y solo comprende, en realidad, el homicidio por precio, habiéndose tomado esta expresión en su neto sentido económico, ya sea como precio recibido o solamente estipulado. Incluso,, Bramont-Arias Torres y García Cantizano son mucho más explícitos al decir que el homicidio por lucro consiste en matar a otra a cambio de alguna compensación económica, que generalmente proviene de otro sujeto. Es más, Villa Stein, siguiendo al legendario e ilustre penalista italiano Carrara, afirma categóricamente que en este tipo de homicidio existen dos sujetos: el mandante y el ejecutor que actúa motivado por una recompensa.

En esa línea, consideramos que tal forma de entender el asesinato por lucro no motivó al legislador en el momento histórico de legislar. En efecto, si esa hubiese sido la intención legislativa al redactar el contenido de esta modalidad, en lugar de indicar “por lucro” hubiese vuelto a la fórmula del viejo Código Penal de 1863 que en el inciso 1 del artículo 232 prescribía “por precio o por recompensa estipulada”. Fórmula que dicho sea de paso, ha sido recogido en el inciso 2 del artículo 139 del Código Penal español de 1995 que prescribe “por precio, recompensa o promesa”.

Debemos tener en cuenta, como punto importante, para el autor Ramiro Salinas, interpretar restrictivamente el homicidio por lucro o codicia, lleva a serios equívocos al juzgador que denotan injusticia ante los ojos del conglomerado social, dejando de lado conductas homicidas efectuadas por codicia que demuestran mayor peligrosidad del agente. En efecto, según aquella respetable posición siempre será necesaria la participación de una tercera personas para que se evidencie la modalidad de asesinato por lucro. No toman en cuenta el supuesto en que perfectamente aparece tal

circunstancia cuando el sujeto activo, por sí solo, hace nacer la intención de poner fin la vida de una persona con el único propósito de obtener algún provecho patrimonial futuro. En este aspecto es fundamental identificar en el sujeto activo el hecho concreto de si dio muerte a su víctima orientado o guiado por la codicia (apetito desordenado de riqueza), la misma que se constituye en característica trascendente de la modalidad de homicidio por lucro.

2.2.9. El maestro **FELIPE VILLAVICENCIO** (VILLAVICENCIO TERREROS, PRIMERA REIMPRESIÓN AÑO 2017) ha sostenido que el tipo legal del homicidio calificado incluye diferentes circunstancias que son consideradas por el legislador susceptible de mayor punibilidad. Es suficiente la presencia de una de ellas (ferocidad, lucr, etc.) para aceptar la tipicidad de la conducta. En cuanto al fundamento de la agravación de la pena prevista para esta figura existe polémica. Algunos consideran que se justifica en función de la mayor peligrosidad del agente, de la mayor culpabilidad por la maldad o perversidad de la intención criminal o de los medios utilizados, o en la mayor antijuricidad. El autor considera que la mayor penalidad de este tipo legal está en función de las diferentes circunstancias que lo integran, en su mayoría por un mayor contenido de injusto, y otra por una culpabilidad más grave.

También precisa que es un aspecto bastante discutido, establecer si el delito de asesinato es autónomo o dependiente del homicidio. Para algunos autores, el asesinato es un delito autónomo del homicidio simple y para otro una figura agravante de este. Sin embargo, con la finalidad de contar con la menor cantidad de tipos penales básicos, se ha configurado el asesinato como un tipo derivado del homicidio simple. En la actualidad, la posición dominante considera que se trata de homicidio agravado, en la práctica, ello tiene cierta trascendencia en diversos ámbitos, especialmente en materia de participación. En efecto, si se entiende que el asesinato es un delito plenamente autónomo, en principio todos los partícipes deberían responder por el mismo delito (unidad del título de imputación).

Debido a la influencia del inciso primero del artículo 232° del Código Penal de 1863 (por precio recibido o recompensa estipulada), el Derecho Penal peruano ha venido interpretando el lucro como homicidio por precio, subrayando las relaciones entre los sujetos que intervienen en el acuerdo. La expresión por lucro no sólo tiene un significado económico o pecuniario o – al menos – económicamente valuable, por lo que esta expresión legal debe entenderse en un sentido normativo más amplio, que no sólo incluya la contraprestación dineraria, sino cualquier retribución, remuneración o condición, económica o no, con que se premia o se acuerda la realización del servicio de matar a otro.

En opinión del autor Villavicencio, y que compartimos plenamente, esta clase de homicidio calificado también es conocida como homicidio por encargo o sicarial, porque se realiza por motivo determinante de un contrato, pacto, convenio entre dos partes para la ejecución de un compromiso criminal; matar a otro, para remunerar por ello, a la otra parte. Según este entendimiento, el fin de lucro sólo tiene el sicario que da muerte a una persona por precio y no en aquella que paga la remuneración. En cuanto al contenido de la remuneración, esta puede ser cualquier cosa, bienes económicos o beneficios personales, e incluso se ha afirmado el propósito de ganarse la “buena voluntad” del jefe. Respecto al contrato o mandato, se podían registrar algunas condiciones: 1. El mandato debe ser expreso y claro, señalando con exactitud a la víctima, no vale la vaguedad al respecto; 2. Debe probarse no solo que se propuso el negocio de dar muerte a otro, sino que el sicario lo aceptó; y 3. Pactante y sicario deben conocerse entre sí o al menos a sus representantes.

No obstante lo anterior, creemos que la figura del homicidio calificado se refiere a la codicia del sujeto activo, bien para obtenerla o evitar que otra la obtenga y se actúa en su perjuicio. Es decir, el deseo inmoderado de la riqueza, ganancia, provecho, dejándose de lado la interpretación anterior. Uno de los motivos más bajos e innobles que puede albergar un hombre para acabar con la vida de otro, es la codicia, o el deseo de lucro; aquella

no radica solamente en el deseo de obtener dinero o bienes con el hecho, sino en el deseo de sacar provecho desmedido. Por ello, la codicia es una de las características del homicidio con ánimo de lucro, que en su forma general se define como “un apetito desordenado de riqueza”. Otros sostienen que el mayor fundamento radica en el mayor repudio que provoca matar sin odio o sin causa personal, sino solo por un interés dinerario y por la menos posibilidad de la defensa frente al agresor. Siguiendo al autor Villavicencio, en definitiva, la codicia comprendida como el afán de excesivo de riqueza, puede cometerse no solo obedeciendo un determinado pacto o contrato sicarial, sino debido a planes financieros que como consecuencia de esa muerte, prometen enormes ganancias; por ejemplo: en el caso que un esposo que contrata una póliza de seguro a nombre de su esposa, y él, como cónyuge beneficiario, la mata para cobrarla, cometería homicidio calificado por ánimo de lucro.

La figura del homicidio calificado admitiría tanto el caso de una motivación unilateral en el individuo que impulsa su voluntad hacia el beneficio como meta (ejemplo: matar para heredar u obtener legado), como el caso del mandato que implica la acción de otra persona (ejemplo: muerte causada por medio de un asesinato asalariado o sicario que reciba orden para matar y lo hace por un precio). Sin embargo, no se aplicará cuando el sujeto estuviera previamente decidido a la comisión del delito por otros motivos con independencia de que después haya venido a recibir una promesa o gratificación del mismo. Sino el lucro debe ser el motor de la acción criminal.

CAPÍTULO III

EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR LUCRO

3.1. Cuestiones Generales.

El delito de homicidio, así como sus derivados (asesinato), son esencialmente dolosos, se requiere como esfera anímica del agente: conciencia y voluntad de realización típica, en cuanto el autor dirige su conducta, sabiendo y queriendo la eliminación de un ser humano. Los elementos que dan lugar en el tipo subjetivo del injusto, deben ser probados en el proceso penal, empezando por el dolo, a lo que habría que sumar el referido “*animus necandi*”, lo que, por su dificultad probatoria o dada la presencia de otros “ánimos”, podría generar espacios de impunidad.

La sociedad actual, a través de una dinámica socioeconómica vertiginosa – producto de la realización de una serie de actividades empresariales, comerciales, industriales, etc. –, hace del hombre un ser animado por el afán de lucro, es decir, la obtención del éxito que, en buena cuenta, es alcanzar los fines más preciados por el materialismo humano, y en ese proceder no siempre hará uso de medios lícitos, en tanto para algunos se debe lograr el objetivo a cualquier precio; de ahí que podemos identificar la “ambición”, como aquella pretensión legítima de los hombres, de progresar, de hacerse de una riqueza ostentible, de alcanzar el poder político; más cuando dicha ambición desborda ciertos límites, cuando trasvasa cierto umbral, se convierte en un móvil despreciable que contradice las normas de convivencia social, el hombre llega a ser preso de sus pasiones más oscuras, de su ambición ciega por la consecución de sus fines propuestos, pese al costo que pueda acarrear el conseguirlos.

Sin duda alguna, el asesinato por lucro, o conocido también por recompensa, es el que adquiere mayor facticidad en la sociedad actual. El maestro Peña Cabrera Freyre, (PEÑA CABRERA FREYRE, 2016), señala que la imagen del sicario que da muerte a la víctima, a cambio de un precio, muestra la careta de muchos crímenes que se cometen día a día en nuestra realidad. De ahí que se atiende a un motivo especial, a un fin que persigue el autor, llevado más por su apremiante ambición desmedida de lucrar a costa de la eliminación de una vida humana. Señala también que el sicario, enrostra una personalidad calculadora, cuya frialdad toma lugar cuando es inducido a eliminar a un individuo, en orden a colmar una pretensión puramente económica. Móvil egoísta que fue recogido por el legislador a fin de construir esta circunstancia agravante y contener la peligrosidad deleznable de matar por lucro y devaluar la vida humana a un propósito económico.

En ese sentido, es bastante debatido el tema relativo a la autonomía del delito de asesinato, existiendo, sobretudo en nuestro medio, dos posturas al respecto, una que niega su autonomía y otra que la afirma. Por nuestra parte, consideramos, que el asesinato constituye un tipo derivado (cualificado) del tipo de homicidio, que por lo demás es la posición que ha asumido en forma unánime nuestros operadores jurisdiccionales cuando han tenido la oportunidad de pronunciarse; a partir de ello, obviamente, se puede asumir que no tendría una autonomía propia; sin embargo, se puede apreciar que tiene características que le dan cierta identidad que lo diferencia del delito de homicidio simple, lo que justifica su configuración y tratamiento distinto.

El fundamento de la agravación en cuanto a las razones que fundamentan su gravedad, la conclusión baría de acuerdo a las circunstancias que califican el asesinato, ya que algunas de ellas revela un mayor contenido del injusto, mientras que otras, una mayor culpabilidad del agente.

Debe tenerse en cuenta que la expresión por lucro no sólo tiene un significado económico o pecuario o –al menos– económicamente valuable; por lo que, esta expresión legal debe entenderse en un sentido normativo más amplio,

que no sólo incluya la contraprestación dineraria, sino cualquier retribución, remuneración o coinciden, económica o no, con que se premia o se acuerda la realización del servicio de matar a otro.

En opinión del autor Villavicencio (VILLAVICENCIO TERREROS, PRIMERA REIMPRESIÓN AÑO 2017), generalmente, esta clase de homicidio calificado también es conocida como *homicidio por encargo o sicarial*, porque se realiza por motivo determinante de un contrato, pacto, convenio entre dos partes para la ejecución de un compromiso criminal; matar a otro, para remunerar con ello, a la otra parte. Según este entendimiento, el fin de lucro sólo lo tiene el *sicario* que da muerte a una persona por precio y no en aquella que paga la remuneración. En cuanto, al contenido de la remuneración, esta puede ser cualquier cosa, bienes económicos o beneficios personales, e incluso se ha afirmado el propósito de ganarse la “buena voluntad” del jefe. Respecto al contrato o mandato, como señalaba Carrara, se podían registrar algunas condiciones: 1. El mandato debe ser expreso y claro, señalando con exactitud a la víctima, no vale la vaguedad al respecto; 2. Debe probarse no sólo que se propuso el negocio de dar muerte a otro, sino que el sicario lo aceptó; y 3. Pactante y sicario deben conocerse entre sí o al menos a sus representantes.

Sin embargo, continuando con el autor en mención, esta figura del homicidio calificado se refiere a la codicia del sujeto activo, bien para obtenerla o evitar que otra la obtenga y se actúa en su perjuicio. Es decir, el deseo inmoderado de la riqueza, ganancia, provecho, dejándose de lado la interpretación restrictiva anterior. Uno de los motivos más bajos e innobles que pueda albergar un hombre para acabar con la vida de otro, es la codicia, o el deseo de lucro; aquella no radica solamente en el deseo de obtener dinero o bienes con el hecho, sino en el deseo de obtener dinero o bienes con el hecho, sino en el deseo de sacar provecho desmedido. Por ello, la codicia es una de las características del homicidio con ánimo de lucro, que en su forma general se define como “un apetito desordenado de riquezas”. Otros sostienen que el fundamento radica en el mayor repudio que provoca matar sin odio o sin causa personal, sino solo por un interés dinerario y por la menor posibilidad

de la defensa frente al agresor. En definitiva, la codicia comprendida como el afán excesivo de riqueza, puede cometerse no solo obedeciendo un determinado pacto o contrato sicarial, sino debido a planes financieros que como consecuencia, de esa muerte, prometen enormes ganancias; por ejemplo, en el caso que un esposo que contrata una póliza de seguro a nombre de su esposa, y él, como cónyuge beneficiario, la mata para cobrarla, cometería homicidio calificado por ánimo de lucro.

Esta figura de homicidio calificado admitiría tanto el caso de una motivación unilateral en el individuo que impulsa su voluntad hacia el beneficio como meta (ejemplo: matar para heredar u obtener legado), como el caso del mandato que implica la acción de otra persona (ejemplo: muerte causada por medio de un asesino asalariado o sicario que reciba la orden para matar y lo hace por un precio).

Sin embargo, esta figura no se aplicará cuando el sujeto estuviera previamente decidido a la comisión del delito por otros motivos “con independencia de que después haya venido a recibir una promesa o gratificación del mismo. Sino el lucro debe ser el motor de la acción criminal.

Esta especial motivación está referida al autor. El inductor lo será si expresa de manera clara la oferta onerosa de homicidio, salvo que este último tenga también la especial motivación de lucro. Sin con anterioridad ya estaba decidida a matar, no debe apreciarse la calificante. Para que el instigador se exima de responsabilidad tiene que revocar de manera clara y expresa el mandato que realizó al agente.

Esta agravante se consuma con la muerte de la víctima indicada o cuando haya sido uno diferente al indicado y no así con el pago del precio de la recompensa, pues basta la formulación de la oferta o promesa aun cuando se incumpla. Referente a la punibilidad, debe señalarse que tanto el sicario como el inductor, abstractamente, tienen la misma pena.

En los supuestos de homicidio calificado en la modalidad de mandato o sicariato, cabe la tentativa, si el sicario, en cumplimiento del mandato criminal, falla y es detenido antes de consumarlo, tanto para este como para su mandante. Pero si el mandante se arrepintió e intentó detener al sicario, no obstante este cumple con el pedido, el mandante responderá en grado de tentativa y el sicario en grado de consumación.

En la figura en comentario, la imputación al partícipe (instigador o cómplice) es muy debatida: “La problemática está vinculada a la posición que se adopte sobre la sustantividad del asesinato o figura agravada del homicidio. Si se admite la primera, en tales casos rigen los principios aplicables a los delitos especiales, es decir, accesoriedad y unidad del título de la imputación. De manera que responderán de asesinato los partícipes (inductores o cooperadores necesarios), que tengan conocimiento de la concurrencia en el hecho de las circunstancias típicas, quedando exceptuados los casos de error, en que responderían como partícipes del homicidio. Por el contrario, si se sostiene que se trata de homicidio agravado deberá aplicarse el régimen general de la eventual comunicabilidad de las circunstancias y, en consecuencia, ruptura del título de imputación.

3.2. Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido es la vida humana independiente. Asimismo, entre los elementos del tipo destacan sujeto activo y pasivo. El presente tipo penal no exige ninguna calificación especial del autor o de la víctima, por lo que pueden ser sujeto activo y pasivo de este delito, cualquier persona (delito común). El tipo no requiere ninguna vinculación especial del agente con el sujeto pasivo, a diferencia del delito de parricidio. Sin embargo, existe una forma especial, de asesinato introducido por la Ley N° 28878, que considera una condición especial referida al sujeto pasivo: su pertenencia a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas, o ser Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público. Supuesto que con anterioridad estaba comprendido en el artículo del asesinato u homicidio calificado y

que actualmente con la Ley N° 30253 se considera una modalidad del asesinato especial.

En nuestro país, a pesar de lo que señalan los gobernantes, el índice de personas – mayores y menores de edad – que han hallado en el “sicariato” su modis vivendi va en aumento; cada día más personas están dispuestas a matar por cualquier precio, lo que demuestra que lo bajo que puede caer la especie humana al priorizar la obtención de una ventaja patrimonial o de cualquier índole.

La razón de ser de esta circunstancia y modalidad de asesino ha sido, unánime en sentir, la bajeza inherente a todo lo vanal, explicándose así su desvinculación del mandato gratuito en que caben otras estimativas de mayor nobleza. Se pone de manifiesto un proyecto infame egoísta, vil, de quien emprende una conducta homicida, impulsado solo por la obtención de un beneficio o de una ventaja.

Debe tenerse en cuenta que, el ejecutor material del asesinato necesariamente debe ser un sicario, que tiene por finalidad acabar el bien jurídico protegido: VIDA; ello en opinión del maestro PEÑA CABRERA FREYRE, el cual es compartido plenamente por la investigadora, pues precisamente, el objetivo del presente trabajo, es demostrar que el tipo penal contenido en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, es en esencia el mismo que el contenido en el artículo 108°-C del citado código sustantivo, pues el autor mencionado, hace alusión a que necesariamente el autor material del asesinato debe ser un sicario, en el sentido de presentarse una relación mandante – mandatario. En la hipótesis de quien mata a otro sabiendo que dicha muerte le podrá reportar un beneficio económico – así tenemos el ejemplo clásico del heredero entendido cuando el agente que ejecuta la muerte del causante percibe una gratificación económica para la realización de dicha muerte, es decir, cuando se “cobre el trabajo de matar”, siendo que el fundamento de la agravación reposa en los motivos que lleva al autor, dar muerte o quitarle la vida a su víctima.

Cabe destacar que en el homicidio calificado por lucro, la recompensa a obtener por el sicario, no tiene por qué concretizarse antes de que se produzca el homicidio, pues debe entenderse que es la estimulación del precio o de la obtención de un beneficio económico, lo que motiva al autor a la realización típica del delito, pudiendo por tanto, perfectamente tomar lugar la “promesa o compromiso” de la entrega del dinero a *posteriori*, cuando ya haya acaecido la muerte del agraviado; incluso debemos tener en cuenta que aun cuando el mandante no cumpliera con efectuar el pago al mandatario del crimen, aun así se configuraría el delito de homicidio calificado por lucro, pues lo que importa en este delito es que en el ejecutor se presente el móvil de lucro.

3.3. Elementos que configuran el tipo.

3.3.1. Sujetos activo y pasivo.

El presente tipo penal no exige ninguna calificación especial del autor o de la víctima, es decir, el autor puede ser cualquier persona, así como en el caso de la víctima, y también se encuentra el hecho de que no necesariamente puede existir algún tipo de vinculación entre éstas. Sin embargo, existe una forma especial de asesinato introducido por la Ley N° 28878, que considera una condición especial referida al sujeto pasivo; su pertenencia a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas, o ser Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Supuesto que con anterioridad estaba comprendido en el artículo del asesinato u homicidio calificado y que actualmente con la Ley N° 30253 se considera una modalidad de asesinato especial.

3.3.2. Comportamiento típico.

La conducta típica consiste en matar a otra persona, concurriendo cualquiera de las circunstancias descritas en el tipo penal *sub examine*, siendo válidas en este punto, las conclusiones a las que se arribó al analizar el delito de homicidio.

La posibilidad de que este delito pueda ser cometido mediante comisión por omisión es dogmáticamente debatible, como se verá al tratar cada una de las modalidades de asesinato.

3.3.3. Tipo subjetivo.

En este punto, resulta relevante determinar si el asesinato puede ser cometido con dolo eventual, ya que la doctrina de modo mayoritario entiende que este delito solo puede ser cometido con dolo directo, solo algunos autores han defendido la posibilidad del dolo eventual en una estructura de dolo directo respecto a la circunstancia y dolo eventual respecto a la muerte.

Así tenemos que el autor MAPELLI CAFFARENA, citado por Gálvez Villegas (GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO y ROJAS LEÓN, RICARDO CÉSAR, 2017), considera que el asesinato con dolo eventual es perfectamente posible en el caso que, pese a la concurrencia de las circunstancias, el sujeto actúa sin la seguridad de producir el resultado. Sin embargo, contra esta posición CARBONELL MATEU-GONZÁLEZ CUSSAC, señalan que la relación medio a fin que exigen todas las circunstancias, impiden su apreciación si el sujeto no actúa con una dirección final de producción la muerte. Así, por ejemplo, en la alevosía se exige que el sujeto utilice aquellos medios que le eviten los riesgos provenientes de la acción defensiva del sujeto pasivo y le aseguren la comisión del hecho delictivo, por lo que, solo una conducta dirigida a la producción de la muerte podrá ser calificada de alevosa.

No obstante, ello, debemos considerar que la ejecución del asesinato con dolo eventual es perfectamente posible en todas sus modalidades; pues, si bien cualquier circunstancia agravatoria exigen una ínfima conexión con la lesión del bien jurídico, esto no implica que deba existir necesariamente una relación finalística. En tal sentido, lo único que se debe exigir es que la circunstancia agravatoria resulte ser la causa de la creación del riesgo jurídico-penalmente relevante. Así, en los casos de alevosía y gran crueldad, no existe mayor inconveniente para admitir el dolo eventual, por ejemplo, el

caso de una agresión inopinada y sorpresiva por parte de una mujer despechada, que con el ánimo de producir el mismo dolor que siente por el engaño que ha sufrido, arroja ácido muriático a la cara de la víctima, la que fallece como consecuencia de las quemaduras producidas y por la asfixia e intoxicación de los gases tóxicos emanados por el ácido.

3.3.4. Comportamiento típico y fundamento de la agravación.

En cuanto al comportamiento típico, consiste en matar a otra persona, concurriendo de las circunstancias descritas en el tipo penal, en el caso concreto, por lucro, siendo válidas en este punto las conclusiones a las que se arribó al analizar el delito de homicidio.

En el caso en análisis, el fundamento de la agravación de esta circunstancia cualificante, reside en un mayor contenido de culpabilidad del proceso de motivación, que determina al sujeto a causar la muerte de alguien en atención al beneficio lucrativo, que pretenden alcanzar con lo que evidencia un desprecio por la vida humana, a tal punto que la pone por debajo de su avaricia pecuniaria, revelando una personalidad especialmente peligrosa.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, LUCRO significa ganancia o provecho que se saca de una cosa, y lucrar es conseguir lo que uno deseaba, utilizar o sacar provecho de un negocio o encargo, de este modo, matar por lucro implica actuar con la finalidad de obtener una ganancia o provecho. Sin embargo, si se entiende de esta manera al término en cuestión, bastaría con que la gente actúe con la finalidad de obtener cualquier tipo de provecho personal, sexual, honorífico, etc., para que esta agravante se configure, lo cual implica una interpretación extensiva en contra del imputado, a la vez que se califica el homicidio con cualquier clase de finalidad; con ello se negaría el fundamento que hemos anotado (valoración de la vida por debajo del interés económico), más aún debemos tener en cuenta que todo delito de homicidio es realizado con la finalidad de alcanzar algún provecho; por lo que el mayor reproche penal no se justificaría ante esta agravante.

CAPÍTULO IV

EL DELITO DE SICARIATO

4.1. Cuestiones Generales.

En los últimos tiempos, especialmente en nuestro medio, se han venido perpetrando una serie de asesinatos por encargo o por precio, habiendo aparecido organizaciones delincuenciales dedicadas al negocio de la muerte, las mismas que por un precio, en algunos casos, mínimo, quitaban (y quitan) la vida a un semejante. Esto se agravó con la aparición de grupos delictivos que utilizaban a menores de edad para el encargo homicida, lo que llevó a una situación de zozobra y de desprecio generalizado por la vida. Habiéndose hecho popular la forma como estas organizaciones o particulares cumplían con el encargo de aniquilar a la persona “sentenciada a muerte” por él “encargante”; modalidad que habitualmente se realizaba a través de disparos de arma de fuego de alguna moto lineal que interceptaba a la víctima en un lugar estratégico, es por ello que se hizo popular en el lenguaje coloquial la frase “te mando la moto”, en alusión a que si alguien se porta mal se le envía un sicario.

El homicidio por precio o sicariato, es un hecho cotidiano en la historia de la humanidad en efecto, el crimen *inter sicarios* u homicidio por mandato, era ampliamente conocido en el Derecho romano. Sin embargo, en las diversas legislaciones ha sido tratado como una forma agravada de homicidio o asesinato, y por ello no ha tenido un tratamiento diferenciado aun cuando siempre presente como una forma de asesinato; específicamente el homicidio por lucro, es decir un homicidio agravado por el móvil.

Aunque no es la zona ni tampoco el período, materia de estudio, a manera de graficar el panorama en el cual se desarrolla la investigación, podemos citar que “la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal

presentó cifras del crimen de “Sicariato”, indicando que entre enero y setiembre de 2014, los sicarios asesinaron a 288 personas en el país, es decir, se ejecutó en promedio una muerte por día. La cifra es el 30% de los 972 homicidios registrados en ese lapso; mientras que, en el año 2013, los asesinatos por encargo registrados en Lima sumaron 62, siendo que en el Callao la cifra se elevó de 32 a 39. El coronel Ricardo Cano – Jefe de la División de Homicidios de la PNP, refirió en una entrevista en el diario El Comercio, que en su mayoría, los sicarios son adolescentes y jóvenes entre los 14 y 25 años. Pueden matar hasta por S/. 300. A veces a los menores ni siquiera les pagan. Cometen el crimen para demostrar que son valientes, como un reto para ser incluidos dentro de una organización; como una forma de ganarse el respeto ante el resto de los miembros de la estructura criminal. Estamos ante una suerte de aprehensión del contacto social, que genera entre el resto de los miembros de la estructura organizacional de estas mafias delictivas; se inculca esta *modus vivendi* de generación en generación” (PEÑA CABRERA FREYRES, 2016).

4.2. Comportamiento típico y fundamento de la agravación.

Debemos iniciar señalando que, la palabra “sicario”, etimológicamente, está formada a partir del latín *sica*, que era el nombre de un puñal de punta muy aguda y filo curvo usado en la antigua Roma. El nombre de esa arma se formó a partir de *secare* “cortar”.

El sicariato es el fenómeno delictivo en el que una persona (sicario o mandatario), motivado en virtud de un precio, promesa o recompensa y mediando un acuerdo previo, mata a otra persona por encomienda, encargo o petición de un tercero (“encargante” o mandante), quien tiene interés en la muerte y es quien toma la decisión de acabar con la vida del sujeto pasivo. Y claro, la conducta realizada por el sicario es ejecutada, en lo sustancial, de conformidad con las indicaciones dadas por el comisionante o encargante, o también según las pautas o acuerdos existentes en la organización criminal encargada de realizar el encargo; aun cuando pueden presentarse casos en

que al mandante únicamente le interesa la muerte de la víctima dejando en libertad al sicario para determinar la forma, momento y circunstancias en que se ejecuta el hecho.

La norma ha previsto varios supuestos agravados, sancionados con cadena perpetua, al considerarlos como los casos de mayor reprochabilidad en el sistema jurídico-penal. Dichas agravaciones consisten en: Valerse de un menor de edad o de otro inimputable, para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal, cuando en la ejecución intervienen dos o más personas, cuando las víctimas son dos o más personas, cuando se utilice arma de guerra.

4.3. Elementos típicos.

4.3.1. Acción Típica.

Cuestión curiosa, es que el mismo autor TOMÁS GÁLVEZ, después de haber precisado que existe diferencia entre el Homicidio Calificado por Lucro y el Sicariato, en su mismo libro citado, ha precisado también que, como quiera que se trata de un caso de homicidio calificado por el móvil (el lucro) la acción típica reúne todas las características de dicho delito (homicidio). Asimismo, el sujeto activo puede ser cualquier persona así como también el sujeto pasivo; sin embargo, luego vuelve a precisar que la modalidad de la acción típica establece la diferencia del sicariato con el homicidio. Pues, el sicario actúa siempre por orden, encargo o acuerdo.

Como punto aparte, debemos entender por orden, a la disposición o mandato que una persona realiza a otra, en este caso, para que ejecute la muerte de determinada persona. Obviamente, dicho mandato debe ser aceptado por el ejecutor, por lo que, al final no se trata de un mandato propiamente dicho sino más bien de una especie de acuerdo previo entre el sicario y el mandante o “encargante” para la ejecución de la muerte de la víctima.

Luego, por encargo, debemos entender al hecho de encomendar a alguien la realización de algo, en el presente caso, la realización de la muerte del sujeto pasivo. Pero igualmente, el ejecutor del encargo debe aceptar de acuerdo con la realización del encargo, de tal forma que estamos hablando de un acuerdo criminal; pues, no se trata de un encargo en que el destinatario está obligado o tenga el deber de cumplir o realizar, por el contrario, actúa impulsado por la obtención del beneficio pactado u ofrecido.

Por último, el acuerdo es la confluencia de las voluntades del encargado y el sicario, es decir, el pacto infame, vil y bajo sobre la muerte de la víctima.

4.3.2. El sicario.

Es el sujeto que ha hecho del homicidio su negocio, y por ende, su forma de vida y por ello revela su total desprecio por la vida de sus semejantes. Dicho sujeto ha priorizado su deseo de obtener ventajas económicas por encima de todo sentimiento de humanidad y solidaridad respecto a la vida humana; consecuentemente revela gran peligrosidad. Por ello, el fundamento de esta figura delictiva no radica únicamente en el mandato que el tercero le hace al sicario, sino más bien en el pacto infame, vil, bajo, sobre el precio o recompensa por el cual el autor interviene materialmente y comete el hecho. El sicario no obra con odio, cólera o pasión, sólo está motivado por su afán de obtener los bienes o ventajas que constituyen la contraprestación del “pacto infame” o el “precio de la vida” que el mismo ha determinado en el acuerdo delictivo con el “encargante”. Es evidente que, se trata de hechos que despiertan gran alarma social; donde la gravedad reside en que el ejecutor actúa sin motivo personal y por un bajo impulso, cual es la recompensa, no conociendo siquiera a quien va a matar; mientras que el otro procura no solo su seguridad sino, también su impunidad, apelando a ese medio premeditado y artero. Por ello, la sanción se aplica tanto al que recibe como al que paga el precio. Ambos responden penalmente como si fueran autores.

4.3.3. El encargado.

Viene a ser la persona que tiene interés específico en la muerte del sujeto pasivo, pero para evitarse riesgos de ineficacia, por temor a ser descubierto o por confiar en el éxito criminal de un tercero o de una organización, encarga a dicho tercero u organización que ejecuten el homicidio. La razón por la que el “encargante” decide que se le quite la vida a la víctima puede ser cualquiera, como el móvil económico, pasional, político, racial, de odio, venganza, para facilitar u ocultar otro delito, etc.; inclusive puede tratarse de una persona que ha sido contratada, para contratar a su vez, al sicario o a la organización que debe encargarse de concretar la muerte de la víctima. Normalmente este es quien idea el homicidio y determina la forma como debe realizarse la muerte, pero ello también puede quedar a cargo del sicario o de la organización de sicarios.

4.3.4. El intermediario.

El intermediario, es la persona que intermedia, entre el “encargante” y el sicario o la organización de sicarios. El uso de estos terceros es común, puesto que la persona interesada en la muerte de la víctima normalmente no quiere involucrarse con el sicario y por ello busca mantenerse alejado de este y a la vez de no tener contacto alguno. Es más puede existir una cadena de intermediarios, que es la que se usaría para mantener totalmente alejado del hecho de sangre a la persona que va a realizar el pago para concretar la muerte, sea porque se trata de un personaje o simplemente porque se trata de mantenerse a buen recaudo.

4.3.5. El acuerdo criminal.

Es el pacto infame, vil, bajo, celebrado entre el “encargante” y el sicario u organización de sicarios, mediante el cual se decide la muerte de la víctima. Es decir, el acuerdo en el que se determina a la futura víctima y se pacta el pago de un estipendio u otorgamiento de cualquier otra ventaja. En este pacto se plasman los pormenores del hecho, tanto respecto a la ejecución de la muerte así como respecto al pago o entrega del beneficio al sicario. El pacto tiene que existir explícitamente con relación a determinado homicidio,

cualquiera que sea la forma que adopte (escrita o verbal). No quedan comprendidos los entendimientos tácitos y, menos aún, la muerte producida por el agente con la esperanza de recibir un precio por ella.

Debe precisarse que no necesariamente, el pacto es un acto concreto acordado en determinado lugar, fecha y modo, sino que puede tratarse de un proceso o secuencia de actos con los mismos o con distintos intervinientes; así se puede consistir en un conjunto de acciones hasta que se define el acuerdo definitivo. Asimismo, comprende a todos los intervinientes en el acuerdo, esto es, al “encargante”, al sicario o sicarios intervinientes así como también a los intermediarios. Pues, el acuerdo puede haberlo celebrado el “encargante” con el intermediario y luego este con el sicario o la organización de sicarios. Inclusive puede tratarse del acuerdo de una cadena de intermediarios o sicarios. En tal sentido, este acuerdo propiamente es un proceso compuesto por un conjunto de actos, todos ellos con relevancia para determinar la participación delictiva de cada uno de sus actores.

Pero debemos tener en cuenta que no todo acuerdo homicida se subsume en el artículo 108°-C, pues, el acuerdo tiene que estar referido a la entrega o promesa de ventaja económica o de cualquier otra índole como precio por la muerte de la víctima, por lo que si se trata de un acuerdo sustentado en la venganza o en el odio que el encargado y el sicario tienen en común contra la víctima, pero no hay la promesa de entrega o ventaja, el hecho no será típico de sicariato.

4.3.6. Ventaja o beneficio económico o de cualquier otra índole.

En este punto debemos indicar, conforme lo sostiene al autor citado, GALVEZ VILLEGAS, en este tipo de delitos es imprescindible el compromiso de entrega o la entrega del beneficio o ventaja a favor del sicario o de la organización encargados de realizar el homicidio. Pues, el sicario solo actúa para obtener este beneficio, toda vez que él no tiene ningún interés en la muerte de la víctima aparte de materializar su apetito lucrativo. No obstante

ello, el beneficio no necesariamente debe ser económico, aun cuando esta es la regla, ya que puede tratarse de un beneficio de cualquier otra índole, como la entrega de drogas, bienes o derechos de contenido patrimonial, mujeres, cargos administrativos o de poder político, etc.

Es suficiente con que el beneficio se ofrezca en el acuerdo homicida, no interesando si finalmente llega este a entregarse o no. Inclusive, no interesa si el encargante o el intermediario que contrata los servicios del sicario tiene realmente la intención de cumplir con la entrega del beneficio o no; pues, es conocido que en este mercado de la muerte, que también se recurre al asesinato de sicarios con la finalidad de liberarse del cumplimiento de la contraprestación luego de que el sicario cumple con dar muerte a la víctima.

4.3.7. Tipicidad subjetiva.

Para la comisión del tipo penal en análisis, exige necesariamente la presencia simultánea de dos aspectos subjetivos: el dolo y un elemento subjetivo distinto del dolo, que en este caso es uno de tendencia interna, pues la finalidad lucrativa asegurada a través del pacto es la que determina la voluntad del sicario. Obviamente, el dolo del agente debe abarcar todos los elementos objetivos del tipo a fin de configurar debidamente el dolo.

4.3.8. Finalidad o propósito de obtener el beneficio.

El sujeto activo, en este caso el sicario, actúa con el propósito de obtener un beneficio, sea económico o de cualquier otra índole, el beneficio perseguido puede ser para sí o para un tercero. Sin embargo, no es indispensable que el sicario logre alcanzar el bien o la ventaja prometida luego de haber cumplido con el pacto criminal; es más, para que el hecho se subsuma plenamente en el tipo no es necesario, que se haya pagado el precio o servicio total o parcialmente antes de la ejecución homicida, solo importa que se actúe motivado por una recompensa o promesa de alguna situación favorable para él mismo o para tercero. Lo cual no obsta para considerar como típicos los hechos en que la recompensa ya se ha entregado antes de

la ejecución de la muerte, pues, la entrega de esta es la única razón que tiene el sicario para perpetrar la muerte.

La norma no tiene una redacción feliz, toda vez que se refiere que el sujeto mata por encargo y con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, con lo que plasmaría un elemento subjetivo de intención (tendencia interna trascendente, según autor en mención), que podrían llevar a considerar que sólo serían típicos los hechos en que el sicario aún no ha recibido la totalidad o parte del beneficio buscado, y precisamente realiza la muerte llevado por las ansias de obtenerlo (propósito de obtener); con lo que se estaría dejando fuera del tipo a los casos en que ya recibió la totalidad del beneficio y solo actúa para cumplir la orden o el compromiso asumido.

El autor considera que, aun con el defecto de la ley, se debe tener en cuenta que el sicariato se caracteriza, precisamente, por la existencia de un precio, ventaja o recompensa que es el elemento que convence al sicario para realizar el hecho delictivo, ventaja cuya concreción no queda sujeta a la entrega previa o posterior al hecho. Pues, la circunstancia que determina la gravedad de estas acciones es la referida al hecho que el sicario hace de la muerte (cegar, apagar, acabar la vida de la víctima) su forma de vida, revelando su total desprecio e instrumentalización de la vida, lo que se agrava con la actuación del “encargante” a través del acuerdo criminal, que también refleja la conducta alevosa del sujeto. En tal sentido, la entrega previa o posterior del beneficio no tiene incidencia alguna en la naturaleza o gravedad del hecho. Consecuentemente, para la configuración del sicariato debe considerarse y evaluarse la existencia del propósito que persigue el sicario para causar la muerte, en cualquier momento del proceso criminal, sea en momentos previos al acuerdo, durante el acuerdo, en el interregno entre el acuerdo y la muerte o en el mismo momento de la muerte.

El texto de la ley considera una expresión amplia para referirse al tipo de ventaja, por lo que resulta típica la persecución de cualquier tipo de ventaja,

sea de orden económico, político, afectivo-sexual, entrega de un bien de valor afectivo, entre otros.

Otro aspecto a precisar es que para la calificación del sicariato no interesa el móvil o la finalidad del mandante o encargante, esta puede ser diversa, sea odio, venganza, móvil político, o también la expectativa o finalidad económica, pero ella es irrelevante; pues, para estos efectos solo se tiene en cuenta la finalidad o propósito del sicario. Asimismo, tampoco interesa la naturaleza del bien o la cantidad o el monto prometido, salvo que sea absurdamente ínfimo, en cuyo caso no se podrá considerar propiamente como un beneficio el que persigue el sicario, y por tanto, no estaremos ante la estructura del delito sino ante un homicidio simple o ante cualquier otra modalidad de homicidio calificado; toda vez que, como ya se dijo, el sicariato, se caracteriza, precisamente, por la existencia de un precio, ventaja o recompensa que es el elemento que convence al sicario.

4.3.9. Supuestos agravados.

En el caso del delito de Sicariato, a diferencia del delito de homicidio calificado por lucro, al pretender ser un tipo penal autónomo, se ha establecido varios supuestos agravados, que son:

4.3.9.1. Valerse de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta.

Esto es, cuando la muerte se realiza a través de un menor o inimputable a quien el agente lo utiliza como instrumento, lo que revela su especial peligrosidad; pues, no tiene miramientos para servirse de la inexperiencia o incapacidad del menor o de aprovecharse de su necesidad para convencerlo a que atente contra la vida de un semejante a cambio de una recompensa o beneficio que normalmente es mínimo. En este caso, en realidad el agente es el único autor (mediato) o responsable penal de la muerte por precio (sicariato), ya que el menor o incapaz, inclusive, puede no ser responsable penalmente.

Obviamente la minoría de edad debe enmarcarse en el parámetro menor a los 18 años, y dentro de la incapacidad debe considerarse tanto la relativa así como la absoluta, pues, la norma no hace distingo al respecto, y claro, en ambos casos se aprecia la especial peligrosidad del agente. Asimismo, también funciona como fundamento de la agravación el hecho que el agente busca aprovecharse del especial tratamiento penal especial que reciben los agentes menores de edad, y demás inimputables, y con ello pretende asegurarse la impunidad.

Puede tratarse de más de un supuesto de valimiento del menor o incapaz; así, puede tratarse del hecho en que es el propio interesado en la muerte (“encargante” al menor) el que se vale de menores o inimputables, en este caso el agente interviene en la comisión del hecho como autor mediano, puesto que instrumentaliza al menor de edad o de cualquier inimputable; inclusive puede haber recurrido a causar o inducir a error al menor o a la coacción.

4.3.9.2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.

Es el caso en que una organización criminal decide la muerte de la víctima o recibe el encargo de perpetrar dicha muerte y encarga o de la orden a un particular o a un miembro de la organización para la concreción de tal cometido. En ambos casos se configura la agravante, puede tratarse de cualquier tipo de organización delictiva, sin interesar cuáles sean los delitos que tienen por objetivo cometer; en efecto, puede tratarse de una organización dedicada al lavado de activos, al tráfico ilícito de drogas, al robo agravado, al secuestro, la extorsión y claro, al sicariato o asesinatos por encargo o por precio.

El término organización criminal, al menos en un sentido genérico, debe entenderse en términos equivalentes al de asociación ilícita. La idea central de organización se deriva de la existencia de un ente con carácter de institución y que posee las notas de permanencia y regularidad en el tiempo. La organización no depende de la conservación y regularidad de

sus miembros, los cuales pueden cambiar constantemente sin que ello implique su alteración o desaparición. La organización está lejos de ser un conglomerado humano o una simple forma numérica en la que solo basta un concierto más o menos ordenado de voluntades superpuestas entre sí sin ningún criterio rector o sin un sentido último; en realidad, ella supone, en su aceptación jurídica, una determinación clara y definida de los objetivos a alcanzar o delitos a cometer y una adecuada selección de los medios y procedimientos disponiendo de una elemental distribución de funciones –ya que no todos los miembros van a realizar la misma tarea– y un necesario principio jerárquico tanto en el mando, como en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas; aun cuando actualmente, no se descarta la existencia de organizaciones horizontales, en donde las jerarquías han desaparecido o no son relevantes; tales parecen ser los casos en que personas provenientes de diversas organizaciones se asocian para perpetrar determinados delitos o para optimizar su actividad criminal.

La organización se distingue de la simple autoría y participación y de la conspiración para delinquir, en que ella no basta la intervención de un número plural de personas en la fase preparatoria del delito, sino que la idea de organización queda satisfecha cuando se logra establecer una formal o material distribución de funciones entre los miembros, determinando los deberes y derechos de cada uno de ellos, como la actividad que ha de cumplir y, además, que exista por lo menos elemental estructura jerárquica entre los “asociados”, señalando un determinado mando y rango, ya sea personal o colegiado, y una determinada línea de acción vertical, basada en el compromiso, elemental lealtad y obediencia respecto a los acuerdos comunes.

4.3.9.3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.

Debe tratarse de una pluralidad de sujetos intervinientes en el hecho de sangre, dos o más de dos. Pero no se trata de cualquier partícipe (autor, cómplice necesario o cómplice secundario) sino que debe tratarse de

autores ejecutivos o coautores. Esto es, la muerte debe ser ejecutada por dos o más personas que se han comprometido a concretar la muerte por el precio, y en efecto, ambos concurren a la escena del crimen para materializar la muerte, aun cuando finalmente solo alguno de ellos sea quien ejecuta los disparos o realiza concretamente la acción homicida. Puede tratarse de sujetos armados, en que ambos o todos ellos están dispuestos a ejecutar el hecho; o también puede tratarse del sujeto que dispara y el que conduce el vehículo al lugar de los hechos o también el que se encarga de evitar que el agente sea descubierto (el “campana”). Es decir, se trata de autores ejecutivos.

Asimismo, también puede tratarse de una pluralidad de sujetos en la que todos no concurren al lugar de los hechos sino que se han distribuido roles o funciones (unos han planificado el hecho, otros han procurado los medios y otros ejecutan el hecho) y cada uno de ellos tiene el dominio de su perspectiva función y como tal responden como autores. No obstante, la agravante no se configura cuando estamos ante un autor ejecutivo y un autor mediato, pues la norma expresamente señala que en la ejecución del homicidio debe haber participado una pluralidad de agentes, y como se sabe, en el caso del autor mediato, precisamente, este no participa en la ejecución. Sin embargo, si se trata de un autor mediato por dominio de la organización, de todos modos se aplica la agravante en virtud del literal b) y si se tratase del uso instrumental de un menor o incapaz, igualmente se aplica la agravante prevista en el literal a).

De otro lado, no se configura la agravante si se trata solo de un autor y un cooperador o cómplice, pues, aun cuando la norma no hace esta diferenciación, estando a la gravedad de la sanción, este tipo penal debe de interpretarse restrictivamente. Asimismo, en el caso que se trate de la participación ejecutiva de un autor y un menor de edad o de un incapaz, si bien a través de una interpretación restrictiva podemos excluir la aplicación de la agravante por pluralidad de agentes, de todos modos, al intervenir un menor de edad, estamos ante la agravante prevista en el

literal a), que igualmente sanciona el hecho con pena de cadena perpetua.

4.3.9.4. Cuando las víctimas son dos o más personas.

En este caso, los sujetos pasivos deben estar comprendidos en la misma resolución criminal planificada; es decir, que se le haya encargado como una sola misión matar a dos o más personas y que por cada una de ellas o todas juntas se entregará la recompensa o el precio. En tal sentido, no se presenta esta agravante en los casos en que al sicario se le da la orden o encargo de matar a “X” y al momento de ejecutar el acto termina acabando con la vida de “X” y “Z”; o se le ordena acabar con la vida de “A” y “B”, pero solamente por “A” se le promete un pago más no así por “B”. Pues, la pluralidad de víctimas justifica la agravante solo cuando se ha planificado la pluralidad del sicariato. Si solo se acuerda el pago por uno y se mata a dos, en todo caso se resolverá el caso, aplicando las reglas del concurso real de delitos.

4.3.9.5. Cuando las víctimas están comprendidas en los artículos 107° primer párrafo, 108°-A y 108°-B primer párrafo.

Tenemos aquí lo siguiente:

a. Parricidio por sicariato (art. 107°, primer párrafo del CP).

Casos en que el “encargante” manda a matar o encarga matar a cualquiera de sus ascendientes, descendientes (natural o adoptivo), cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente.

b. Homicidio calificado por la condición oficial de la víctima de sicariato (art. 108°-A del CP).

En pleno ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ella el sicario da muerte a un funcionario del Estado de los especificados en el artículo 108°-A del Código Penal. Dichas funciones deben encontrarse dentro del marco de la legalidad y de la constitucionalidad (porque el derecho no puede proteger conductas abusivas), por lo tanto no se

satisface esta agravante cuando el sicario mata a causa de un ejercicio arbitrario de las funciones, por ejemplo un policía detiene injustificadamente a un sujeto y su primo que está a su lado ordena a un tercero, bajo la promesa de un beneficio económico, matar al efectivo.

c. Femicidio por sicariato (art. 108°-B, primer párrafo del CP)

Cuando se mata por orden, encargo o acuerdo a una mujer en cualquiera de los siguientes contextos, violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

El sicario o el mandante deben ser conscientes de los contextos en los cuales se quiere dar muerte a una mujer, pues si no es así, no se aplicará esta agravante.

4.3.9.6. Cuando se utilice armas de guerra.

En general, un arma es un dispositivo que amplía la dirección y la magnitud de una fuerza empleada en un ataque o en una defensa, magnificando y potenciando su poder defensivo o de ataque. Existen diversos tipos de armas pero las más famosas son las armas blancas y las armas de fuego; sin embargo, la clasificación más resaltante es la de armas de uso civil o particular y armas de guerra. Respecto a las de uso civil, su uso y tenencia son autorizados a los particulares, en cambio las de guerra está prohibida toda tenencia, posesión o propiedad a favor de los particulares.

En efecto, el uso y tenencia de las armas de uso civil están regulados por la Ley N° 30299, la misma que en su artículo 13° clasifica a las armas de fuego de uso civil en armas de defensa personal, seguridad y vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección. Por su parte el artículo 175° de la Constitución Política del Estado, estipula que sólo las Fuerzas Armadas – Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea – y la Policía Nacional

pueden poseer armas de guerra; asimismo, que todas las armas de guerra existentes así como las que se fabriquen o introduzcan en el país son propiedad del Estado. Con ello se establece una prohibición absoluta sobre su uso y posesión por los particulares. En caso de encontrarse alguna de estas armas en poder de particulares, inmediatamente procederá el decomiso por la propia Policía Nacional – o incluso por otra autoridad, dando cuenta a la PNP o a la Fiscalía – sin que se requiera de la autorización judicial o fiscal, puesto que no entra en juego derecho alguno de los detentadores de las armas, ya que no es posible el nacimiento de derecho sobre estas.

Para la configuración de esta agravante el homicidio además de haberse perpetrado por encargo, orden o acuerdo, debe haberse realizado utilizando un arma de guerra, esto es una de enorme poder destructivo o alta capacidad lesiva, como los fusiles, pistolas automáticas, ametralladoras, granadas entre otras.

Asimismo, para que el “encargante” o intermediario sea responsable de esta agravante debe haber tenido pleno conocimiento de la forma como iba a materializarse el hecho homicida, es decir a través del uso de un arma de guerra, circunstancia que normalmente causa gran alarma social y pone en peligro la vida o bienes de terceros, debido a su gran poder destructivo.

4.4. Pronunciamientos de la Corte Suprema de la República.

Tenemos algunos importantes pronunciamientos que nos hacen advertir que la Corte Suprema de la República, ya se ha pronunciado sobre la similitud de ambas figuras delictivas en análisis, así tenemos las siguientes:

4.4.1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el **Recurso de Nulidad N° 1784-99-Chimbote**, desde años anteriores, hizo una precisión importante respecto a la configuración del delito de homicidio por lucro (que

nos lleva a sustentar aún más la presente investigación); el caso fue el siguiente: “A un sujeto se le denunció por homicidio calificado, al haber dado muerte a una persona para luego sustraerle una cadena de oro y la suma de doscientos nuevos soles. La Sala Penal Superior condenó al imputado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio del occiso; imponiéndole veinticinco años de pena privativa de la libertad. En segunda instancia, la Sala Suprema, confirmó el fallo; precisando que, en el caso en cuestión, no se configuró de ninguna manera la circunstancia calificante del homicidio por lucro, al no haberse probado la responsabilidad penal del presunto agente mediato; siendo que en el homicidio perpetrado por el imputado se califica, más bien, por haber constituido el medio para la comisión del delito patrimonial.” (el subrayado es nuestro).

4.4.2. Luego también, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia, en el **Recurso de Nulidad N° 778-2003-Puno**, el caso fue: “Se siguió proceso penal contra un sujeto que mató a una mujer, ahorcándola con unas soguillas que puso en su cuello, luego de cubrirle el rostro con una chalina y atar sus pies y manos; hechos en los que también habría intervenido el hermano de la víctima, quien fue declarado reo contumaz. Luego de que el imputado reconoció haber dado muerte a la víctima, la Sala Penal Superior concluyó que, en el homicidio perpetrado, se presentaba, entre otras agravantes, la de lucro, razón por la cual condenó al imputado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, imponiéndole quince años de prisión. La Sala Suprema anuló este fallo y condenó al imputado por homicidio simple, al considerar que la agravante de lucro supone la existencia de un entendimiento previo entre el mandante y ejecutor del homicidio, acordando el pago de un beneficio; circunstancia que no fue reconocida por el imputado en el caso en cuestión.” (el subrayado es nuestro).

4.4.3. Además está el **Recurso de Nulidad N° 1260-2004-Lima**, establece: “Que, en el presente caso, la concreta conducta delictiva imputada

consistió en un asesinato por lucro, pues los agentes actuaron impulsados por el móvil de obtener un provecho de carácter económico, a cuyo afecto se pactó con el sentenciado – previos tratos y contactos con el apodado “Frank”, integrante de la organización delictiva antes indicada – el pago de la suma de cien mil dólares americanos para matar a Nora Luz Ruiz Aguilar; que el atentado se ejecutó – luego de la planificación pertinente – el día tres de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez y cincuenta de la noche, a la altura de la cuadra uno de jirón Los Nogales – Urbanización Camacho, La Molina; a cuyo efecto se interceptó el automóvil conducido por William Isidoro de la Cruz Morón, con el auxilio de tres vehículos y el concurso numerosos delincuentes, quienes – ante la maniobra defensiva de William Isidoro de la Cruz Morón, guardaespaldas de la víctima – hicieron uso de armas de fuego que portaban haciendo un total de cincuenta y cuatro disparos contra el coche de aquella con decidido ánimo homicida, a consecuencia de lo cual fallecieron por los impactos de bala Nora Luz Ruiz Aguilar – objetivo específico del atentado –, su menor hija Melissa Paredes Ruíz y el citado efectivo de seguridad, así como resultó herida la menor J.A.D.”.

4.4.4. En el **Recurso de Nulidad N° 1599-2011-Lima**, se describe la configuración de la modalidad por “lucro” (sicariato), de la siguiente forma: “Se refiere al homicidio cometido por orden y cuenta ajena, esto es, querido por una persona y ejecutado por otra persona distinta, que en esta agravante interviene: Sujeto ejecutor, es el que realiza el hecho bajo el estímulo de una recompensa sujeto que asegura su impunidad con la mera disposición; el tipo penal al señalar “el que mata a otro ... por lucro”, hace alusión al homicidio por mandato, en el fundamento de que un individuo cuando contrata acuerda con un sicario para que mate a un tercero, definitivamente este ejecutor va a solicitar algún beneficio, dinero en efectivo, bienes o una posición ventajosa para él, lo que se denomina “sicariato” (el subrayado es nuestro).

4.4.5. En el caso mediático de Abencia Meza y César Mamanchura, se emitió el **Recurso de Nulidad N° 1192-2012-Lima**, ha señalado lo siguiente: “En lo atinente al homicidio por lucro, este se refiere al homicidio cometido por orden y cuenta ajena; esto es, al evento punible (muerte de un ser humano) deseado por una persona y ejecutado por otra distinta; así, el fin del autor es lucrar con la vida ajena, condición repugnante que agrava el homicidio, más todavía, con razón se afirma el fundamento de dicha agravante está en el acuerdo infame entre mandante y mandatario, es decir, uno paga para que otro mate y el autor acepta o recibe la promesa para matar; de ahí que el homicidio por lucro – codicia, precio o promesa remuneratoria, como dicen otros códigos – por lo general es el **crimen inter sicarios**, del derecho romano, el homicidio por mandato, por ello, la mayor gravedad de este homicidio radica, respecto del mandante, en el hecho de que engloba con la propia perfidia a una persona indiferente que se presta por codicia a servir sus deseos criminales; y respecto del mandatario, la muerte dada sin un fin propio o sea como instrumentos de fines ajenos – el término lucro empleado en nuestro Código es más lato que los términos “codicia”, “precio” o “promesa remunerativa” que emplean otros Códigos –. Por último tenemos que un hombre puede matar a otro no solo por lucrar con el precio en dinero que le haga el inductor, sino también por obtener una casa, una alhaja, un empleo, etc., además de un acuerdo con la doctrina no es preciso que el dinero o la recompensa se hayan entregado; basta la mera promesa.” (el subrayado y resaltado es nuestro).

4.4.6. También tenemos la jurisprudencia suprema **Recurso de Nulidad N° 3629-2012-Lima**, que ha señalado: “Este Supremo Tribunal establece que el “Sicariato” como categoría política crimino – sociológico y traducida jurídicamente como homicidio por lucro, se encuentra tipificado en el inciso uno del artículo ciento ocho del Código Penal, denominándose sicario al que comete homicidio por precio. Así el origen histórico del sicario, se inicia en la antigua Palestina y específicamente en la población judía; esto es, que el sicariato existe desde épocas de antaño, cuando se le denominaba “Muerte por encargo”, siendo una de las características de dicha conducta

delictiva, la frialdad con que actúan al cometer delitos. De este modo podemos señalar que el “encargo” no es más que la acción de encargar, encomendar algo a alguien; que, en el caso de un homicidio, una persona quiere la muerte de otra, y a efectos de no llevar directamente la consumación, encarga la ejecución a otra persona. Cabe indicar que existe la interrogante de porqué el propio mandante no ejecuta el crimen por sí mismo, teniendo como explicación el temor, evitar riesgos directos, confiar en el éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino, pánico a ser sorprendido in fraganti, preparar su coartada si se descubre al encomendado, entre otros; de manera que quien encarga el homicidio es quien lo ideó, esto es, el autor mediato o intelectual; y siendo quien lo ejecuta, el que materialmente mata a la víctima, esto es, autor material o “brazo ejecutor”. Asimismo, el sólo hecho de celebrar el pacto entre autor intelectual y actor material resulta siniestro y perverso, por eso es preciso establecer que la aceptación por parte del autor material es netamente económico; siendo esta la principal característica de esta modalidad de muerte, aunque en determinados sectores el sicario mata por deber de obediencia, ya que forma parte de una escala jerárquica mafiosa, sea de bandas de narcotráfico, antisociales por tráfico de mujeres, tráfico de armas, entre otros; y, en ese sentido, que para que el mandante contrate los servicios de un “sicario” deberá necesariamente existir un “móvil”; siendo éstos múltiples, como: venganza, odio, rencor, despecho, ansia de heredar eliminando al interpuesto en el orden sucesorio, ocultamiento de un accionar corrupto, deudas, ajustes de cuentas por deudas con el narcotráfico.” (el subrayado y resaltado es nuestro).

CAPÍTULO V

DOBLE CRIMINALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS EN ANÁLISIS

5.1. Cuestiones Generales.

Debemos precisar en primer lugar que, la dación de normas penales, efectuadas por el Poder Legislativo, deben darse atendiendo a verdaderas políticas criminales, entendida esta como aquella ciencia política social, que se orienta y encamina a la formulación positiva, una lucha adecuada y eficaz contra la criminalidad, de arreglo al principio de legalidad y de las instituciones encargadas funcionalmente de ejecutarlas (PEÑA CABRERA FREYRE, 2004). Entonces la conflictividad social producida por el delito demanda una reacción del Estado a partir de razones de justicia y de utilidad, ambos, constituyen la política criminal, es decir, las pautas a tener en cuenta por el legislador, en el proceso criminalizador (HURTADO POZO J. , 2011).

Sin embargo, lo que ocurre hoy en día es que por presión social y sin ningún tipo de lineamientos o pautas de política criminal se han incrementado, sin control alguno, la dación o creación de nuevos tipos penales, en nuestro catálogo punitivo, en un intento del Estado de frenar la creciente ola delincencial, sin analizar las verdaderas causas que las originan. Siendo ello así, en el presente caso, la investigadora sostiene que el tipo penal de Homicidio Calificado por Lucro tiene estrecha relación –por no indicar que se trataría del mismo– con el tipo penal de Sicariato.

Conforme a lo anotado, consideramos entonces, que el tipo penal de Homicidio calificado por lucro, en esencia es el mismo tipo penal contenido en el artículo 108°-C referido al Sicariato, en razón a que en ambos tipos penales, la motivación que mueve al agente o sujeto activo, para victimar al sujeto pasivo, es el pecuniario o el económico, toda vez que, busca obtener un provecho lucrativo una vez realizado el encargo (muerte de la víctima). Tal

esencia, es la que contiene ambos tipos penales, materia de la presente investigación, siendo que en el caso de la introducción reciente del tipo penal de Sicariato, se han establecido diversas circunstancias a tener en cuenta para la agravación de la conducta típica, lo cual, de ninguna forma la hace independiente del tipo penal de Homicidio calificado por lucro, motivo por el cual, consideramos también que se debe proponer la derogatoria de éste último, a efectos de generar diversos conflictos en los órganos jurisdiccionales, como el que pueda alegar o solicitar la defensa técnica, de aplicar uno de los tipos penales por contener una pena más benigna.

No obstante lo señalado, y que resulta la posición que el presente trabajo de investigación pretende sostener, el autor TOMÁS GÁLVEZ (GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO y ROJAS LEÓN, RICARDO CÉSAR, 2017), ha señalado que, *“en el sicariato, a diferencia del homicidio calificado o asesinato por lucro, el sicariato se materializa la muerte por el precio, este no tiene ningún interés en la muerte de la víctima, únicamente realiza el acto por la existencia del acuerdo criminal, en cambio en el asesinato por lucro el propio agente del asesinato es el que busca beneficiarse con la muerte, esto es, el beneficio lucrativo no es obtenido por pago o pacto con tercero, sino por la propia muerte de la víctima, hecho en el que participa directamente el asesino beneficiado con la muerte”*.

Para el autor en mención, señala que el más notorio y mayor problema dogmático que surgió con la entrada en vigencia del delito de sicariato (art. 108°-C del Código Penal), es su diferenciación con el delito de homicidio calificado por lucro (art. 108° CP). Refiere que, en efecto la palabra “lucro” dentro del homicidio calificado siempre ha sido merecedora de un significado amplio, pero ahora su sentido se ha visto restringido a los casos donde el sujeto activo, guiado por la obtención de un beneficio (patrimonial o de otra cualidad), unilateralmente toma la decisión de cegar la vida de su víctima, llevado por el móvil de obtener un beneficio económico y él mismo realiza el hecho. Y en los casos en que existe un acuerdo bilateral donde intervienen un mandante y un mandatario (sicario) para acabar con la vida de un tercero, aun

cuando mandante o “encargante” actúe por el móvil del lucro, de conformidad al principio de especialidad, este encuadrará en el sicariato y ya no, como antes se hacía, en el asesinato por lucro.

5.2. Análisis del tema planteado.

Ahora como bien sabemos el artículo 108°-C del Código Penal, entró en vigencia a raíz de la emisión del Decreto Ley N° 1181 de fecha 27 de julio de 2015, entonces, el más notorio y mayor problema dogmático que surgió con la mencionada entrada en vigencia del delito de sicariato (art. 108°-C del Código Penal), es su diferenciación con el delito de homicidio calificado por lucro (art. 108° CP). En efecto, el asesinato por lucro, o también conocido en doctrina, “por recompensa”, es el que adquiere mayor facticidad en la sociedad actual. La imagen del sicario que da muerte a su víctima a cambio de un precio muestra la careta de muchos crímenes, que se cometen día a día en nuestra realidad. De ahí, que se atiende un motivo especial, a un fin que persigue el autor –sujeto activo– llevado a más por su apremiante ambición desmedida de lucrar a costa de la eliminación de una vida humana; enrostra una personalidad calculadora, cuya frialdad toma lugar cuando es inducido a eliminar a un individuo, en orden a colmar una pretensión puramente económica. Móvil egoísta, que fue recogido por el legislador, a fin de constituir esta circunstancia agravante, cuya peligrosidad radica en lo desleznable que significa matar por lucro, devaluando la vida humana a un propósito mercantilista.

En nuestro país, los denominados “sicarios” abundan por doquier –quienes están dispuestos a matar a una persona–, a cualquier precio, lo que demuestra lo bajo que puede caer la especie humana, cuando ha de primar la obtención de una ventaja patrimonial o de cualquier índole– ¿Es que acaso el hombre no puede procurar la satisfacción de sus necesidades más elementales, mediante el trabajo digno y honrado?.

La razón de ser de esta circunstancia y modalidad de asesino ha sido unánime en sentir la bajeza inherente a todo lo vanal, explicándose así su desvinculación del mandato gratuito en que caben otras estimativas de mayor nobleza. Se pone de manifiesto un propósito abyecto, un móvil egoísta, de quien emprende una conducta homicida, impulsado por la obtención de un beneficio, de una ventaja.

En el caso que presentamos, debe tratarse necesariamente de un sicario, el ejecutor material del asesinato, en el sentido de una relación mandante – mandatario, en la hipótesis de quien mata a otro, sabiendo que dicha muerte le podrá reportar un beneficio económico (caso del heredero, por ejemplo), no daría lugar a la agravante en cuestión, debiendo ser reconducida la conducta a la tipificación penal prevista en el artículo 106. No cabrá apreciarla cuando la muerte del sujeto pasivo comporte necesariamente el beneficio, sino cuando se perciba una gratificación económica para la realización de dicha muerte, cuando por así decirlo “se cobre el trabajo de matar”. El fundamento de la agravación reposa en los motivos que lleva al autor, dar muerte a su víctima.

En opinión del maestro Peña Cabrera Freyre (PEÑA CABRERA FREYRE A. R., DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, 2017), en el homicidio por lucro intervienen dos sujetos: Uno, el ejecutor, quien realiza el hecho bajo estímulo de una recompensa; y, otro, quien asegura impunidad con la mera disposición. Descripción ampliamente compartida por la suscrita, pues, conforme se viene sosteniendo, se considera que existe una doble criminalización de la conducta delictiva del homicidio por lucro con el delito de sicariato.

Lo anterior, nos lleva a determinar los ámbitos punitivos de responsabilidad individual; quien actúa desde atrás, provocando en el autor material la decisión de matar es el denominado “instigador”, quien con su obrar psicológico generó en el instigado el dolo de matar. Quien tiene el dominio de hecho es el autor (ejecutor) del homicidio y, no la persona que lo determinó a

tal deliberación delictiva (instigador), pues el primero al saber perfectamente que los hechos que emprende son constitutivos de un ilícito accionar, puede frustrar su realización típica, por lo tanto, es quien tiene el señorío del dominio del acto. Situación diversa aparece en la autoría mediata, donde el hombre de atrás, a partir del dominio de la voluntad es quien ostenta el dominio del hecho.

Entonces, como es de advertirse el mayor reproche, recae sobre el ejecutor material del delito, quien de propia mano da muerte al sujeto pasivo; requiriéndose, entonces, dos elementos: uno, de naturaleza subjetiva, referido al móvil que motiva al agente a la realización del evento típico y, el otro, de carácter objetivo, dar muerte a la víctima. Se dice, que la predisposición delictiva, que determina el comportamiento de matar no es identificable en la persona del instigador, que al constituir un factor personal que recalca en el instigado, no es extensible al primero; como anota PEÑA CABRERA, la motivación por lucro es una circunstancia personal que caracteriza la disposición moral del delincuente y cuyo conocimiento por parte del inductor, que utiliza el precio, para mover la voluntad del autor, no es suficiente para dar a su hecho una mayor reprochabilidad, pues es característica de la instigación que el instigador se valga de medios que movilicen el autor; por ello su reprochabilidad no debe verse aumentada solo por el recurrir a estos móviles del autor.

Un punto muy importante a tratar es respecto a las penas impuestas para cada uno de los delitos en análisis, pues en el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto en el artículo 108° del CP, establece una pena abstracta no menor a los quince años de pena privativa de la libertad, en cambio para el delito de Sicariato, previsto en el artículo 108°-C, establece una pena no menor a los veinticinco años, y en el caso de la concurrencia de las agravantes, la pena que podrá imponerse es de cadena perpetua. Entonces, cabe preguntarnos, si como venimos sosteniendo las figuras delictivas en análisis en esencia constituyen el mismo tipo penal, que pasaría si los operadores de justicia, específicamente los que se encargan de ejercer la

defensa técnica de los imputados o investigados, en lugar de que se le juzgue a su patrocinado por el delito de Sicariato, alegan que deben ser juzgados por el delito de Homicidio Calificado por Lucro? Y ello, por cuanto, éste último delito contiene una pena más benigna, que el primero nombrado, lo cual generaría un estado de inseguridad jurídica, en la administración de justicia, pues podría generarse una corriente entre los abogados litigantes o de la misma Defensoría Pública, de solicitar la calificación más benigna a sus patrocinados.

Lo anterior, es el fundamento principal de la presente investigación pues, el hecho de considerar a ambas figuras delictivas en análisis como la misma: **Homicidio Calificado por Lucro = Sicariato**, nos permite sostener la necesidad de que debe procederse a derogar la primera figura delictiva en análisis y con ello, dejar plena vigencia y autonomía del delito de Sicariato, que ha sido incorporado con diversas agravantes en nuestro catálogo punitivo, en respuesta a un clamor social de justicia, por el escenario de creciente ola delincuencia y de creciente inseguridad ciudadana que viene afrontando nuestra sociedad en nuestro país.

En esa línea, debemos señalar que, consideramos que sí continúa vigente el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, en cuanto al término lucro, se estaría sobrecriminalizando con la vigencia reciente del artículo 108°-C del CP, pues como hemos desarrollado en los capítulos anteriores, ambas figuras presentan serias coincidencias que no han permitido llegar a dicha conclusión. Así las cosas, la derogatoria que se propone es la siguiente:

ARTÍCULO VIGENTE:

“Artículo 108.- Homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

- 1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.*
- 2. Para facilitar u ocultar otro delito.*

3. *Con gran crueldad o alevosía.*
4. *Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.”*

ARTÍCULO PROPUESTO:

“Artículo 108.- Homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. *Por ferocidad, codicia, o por placer.*
2. *Para facilitar u ocultar otro delito.*
3. *Con gran crueldad o alevosía.*
4. *Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.”*

5.3. Análisis de la jurisprudencia citada.

La jurisprudencia suprema nacional citada en el punto 4.4., nos permite señalar que incluso desde antes de la dación del Decreto Legislativo N° 1181 publicado el 27 de julio de 2015, que incorporó el delito de Sicariato en el artículo 108°-C de nuestro Código Penal, la Corte Suprema de la República, ya se había pronunciado mucho antes, sobre la interpretación del delito de Homicidio Calificado por Lucro, como el mismo delito de Sicariato, tal es así, por ejemplo:

- a. El **Recurso de Nulidad N° 1784-99-Chimbote**, precisó: “A un sujeto se le denunció por homicidio calificado, al haber dado muerte a una persona para luego sustraerle una cadena de oro y la suma de doscientos nuevos soles. La Sala Penal Superior condenó al imputado como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio del occiso; imponiéndole veinticinco años de pena privativa de la libertad. En segunda instancia, la Sala Suprema, confirmó el fallo; precisando que, en el caso en cuestión, no se configuró de ninguna manera la circunstancia calificante del homicidio por lucro, al no

haberse probado la responsabilidad penal del presunto agente mediato; (...).” (el subrayado es nuestro).

- b. El **Recurso de Nulidad N° 778-2003-Puno**, señaló: “(...). La Sala Suprema anuló este fallo y condenó al imputado por homicidio simple, al considerar que la agravante de lucro supone la existencia de un entendimiento previo entre el mandante y ejecutor del homicidio, acordando el pago de un beneficio; circunstancia que no fue reconocida por el imputado en el caso en cuestión.” (el subrayado es nuestro).
- c. El **Recurso de Nulidad N° 1260-2004-Lima**, estableció: “Que, en el presente caso, la concreta conducta delictiva imputada consistió en un asesinato por lucro, pues los agentes actuaron impulsados por el móvil de obtener un provecho de carácter económico, a cuyo afecto se pactó con el sentenciado – previos tratos y contactos con el apodado “Frank”, integrante de la organización delictiva antes indicada – el pago de la suma de cien mil dólares americanos para matar a Nora Luz Ruiz Aguilar; (...)”.
- d. El **Recurso de Nulidad N° 1599-2011-Lima**, describió la configuración de la modalidad por “lucro” (sicariato), de la siguiente forma: “Se refiere al homicidio cometido por orden y cuenta ajena, esto es, querido por una persona y ejecutado por otra persona distinta, que en esta agravante interviene: Sujeto ejecutor, es el que realiza el hecho bajo el estímulo de una recompensa sujeto que asegura su impunidad con la mera disposición; el tipo penal al señalar “el que mata a otro ... por lucro”, hace alusión al homicidio por mandato, en el fundamento de que un individuo cuando contrata acuerda con un sicario para que mate a un tercero, definitivamente este ejecutor va a solicitar algún beneficio, dinero en efectivo, bienes o una posición ventajosa para él, lo que se denomina “sicariato” (el subrayado es nuestro).

- e. En el caso mediático de Abencia Meza y César Mamanchura, se emitió el **Recurso de Nulidad N° 1192-2012-Lima**, determinó: “En lo atinente al homicidio por lucro, este se refiere al homicidio cometido por orden y cuenta ajena; esto es, al evento punible (muerte de un ser humano) deseado por una persona y ejecutado por otra distinta; así, el fin del autor es lucrar con la vida ajena, condición repugnante que agrava el homicidio, más todavía, con razón se afirma el fundamento de dicha agravante está en el acuerdo infame entre mandante y mandatario, es decir, uno paga para que otro mate y el autor acepta o recibe la promesa para matar; de ahí que el homicidio por lucro – codicia, precio o promesa remuneratoria, como dicen otros códigos – por lo general es el **crimen inter sicarios**, del derecho romano, el homicidio por mandato, por ello, la mayor gravedad de este homicidio radica, respecto del mandante, en el hecho de que engloba con la propia perfidia a una persona indiferente que se presta por codicia a servir sus deseos criminales; y respecto del mandatario, la muerte dada sin un fin propio o sea como instrumentos de fines ajenos – el término lucro empleado en nuestro Código es más lato que los términos “codicia”, “precio” o “promesa remunerativa” que emplean otros Códigos –. Por último tenemos que un hombre puede matar a otro no solo por lucrar con el precio en dinero que le haga el inductor, sino también por obtener una casa, una alhaja, un empleo, etc., además de un acuerdo con la doctrina no es preciso que el dinero o la recompensa se hayan entregado; basta la mera promesa.” (el subrayado y resaltado es nuestro).
- f. El **Recurso de Nulidad N° 3629-2012-Lima**, señaló: “Este Supremo Tribunal establece que el “Sicariato” como categoría política crimino – sociológico y traducida jurídicamente como homicidio por lucro, se encuentra tipificado en el inciso uno del artículo ciento ocho del Código Penal, denominándose sicario al que comete homicidio por precio. Así el origen histórico del sicario, se inicia en la antigua Palestina y específicamente en la población judía; esto es, que el sicariato existe desde épocas de antaño, cuando se le denominaba “Muerte por

encargo”, siendo una de las características de dicha conducta delictiva, la frialdad con que actúan al cometer delitos. De este modo podemos señalar que el “encargo” no es más que la acción de encargar, encomendar algo a alguien; que, en el caso de un homicidio, una persona quiere la muerte de otra, y a efectos de no llevar directamente la consumación, encarga la ejecución a otra persona. Cabe indicar que existe la interrogante de porqué el propio mandante no ejecuta el crimen por sí mismo, teniendo como explicación el temor, evitar riesgos directos, confiar en el éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino, pánico a ser sorprendido in fraganti, preparar su coartada si se descubre al encomendado, entre otros; de manera que quien encarga el homicidio es quien lo ideó, esto es, el autor mediato o intelectual; y siendo quien lo ejecuta, el que materialmente mata a la víctima, esto es, autor material o “brazo ejecutor”. Asimismo, el sólo hecho de celebrar el pacto entre autor intelectual y actor material resulta siniestro y perverso, por eso es preciso establecer que la aceptación por parte del autor material es netamente económico; siendo esta la principal característica de esta modalidad de muerte, aunque en determinados sectores el sicario mata por deber de obediencia, ya que forma parte de una escala jerárquica mafiosa, sea de bandas de narcotráfico, antisociales por tráfico de mujeres, tráfico de armas, entre otros; y, en ese sentido, que para que el mandante contrate los servicios de un “sicario” deberá necesariamente existir un “móvil”; siendo éstos múltiples, como: venganza, odio, rencor, despecho, ansia de heredar eliminando al interpuesto en el orden sucesorio, ocultamiento de un accionar corrupto, deudas, ajustes de cuentas por deudas con el narcotráfico.” (el subrayado y resaltado es nuestro).

En ese sentido, consideramos que dicha postura asumida, desde tiempo atrás (año 1999 hasta año 2012), por la Corte Suprema de la República, es la que comparte y sostiene la suscrita, toda vez que, consideramos que el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, es el mismo que el contenido en el artículo 108°-C

del citado código sustantivo, es decir, es el mismo que el delito de Sicariato, y dicha conclusión a la cual se ha llegado después de revisar doctrina y jurisprudencia nacional al respecto, se ha arribado por cuanto en la estructura típica de ambos delitos encontramos lo siguiente:

	HOMICIDIO CALIF. POR LUCRO	SICARIATO
ARTÍCULO CP	108° inciso 1	108°-C
ACCIÓN TÍPICA	El que mata a otro	El que mata a otro
SUJETO ACTIVO	Cualquier persona 1. Mandante 2. Mandatario	Cualquier persona 1. Mandante 2. Mandatario
SUJETO PASIVO	Cualquier persona	Cualquier persona
ACUERDO PREVIO	Entendimiento previo	Entendimiento previo
RECOMPENSA	Lucro	Beneficio económico o de cualquier otra índole
MÓVIL	Económico, venganza, odio, rencor, despecho, ansia de heredar, entre otros.	Económico, venganza, odio, rencor, despecho, ansia de heredar, entre otros.
PENA ABSTRACTA	No menor de 15 años PPL	No menor de 25 años PPL

Como se puede observar del recuadro planteado que antecede, tanto en el delito de Homicidio Calificado por Lucro, como en el de Sicariato, apreciamos la concurrencia de los mismos elementos configurativos de la conducta humana punible, por cuanto, en ambos delitos se advierte un factor común que es que el sujeto activo del delito (“ejecutor”, “mandatario”, etc.) obtiene un beneficio económico o persigue un fin lucrativo, entonces, podemos afirmar que se trataría de la misma conducta delictiva, y por ende resulta necesaria la derogación de una de ellas, siendo que en el presente caso, dado que en el nuevo delito de Sicariato previsto en el artículo 108°-C del Código Penal, se han establecido además diversas agravantes –que dicho sea de paso sean establecido dada la realidad criminal social actual, además del art. 108°-D sobre Conspiración y ofrecimiento para el Sicariato– consideramos la propuesta de que se derogue el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal.

Otro punto muy importante a tratar, es que de la revisión de la jurisprudencia –sentencias de primera y segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque– emitida en el Distrito Fiscal de Lambayeque, y en el período materia de investigación Agosto 2015 – agosto 2017, lamentablemente no se ha obtenido información respecto a la forma de cómo se ha pronunciado nuestro órganos jurisdiccionales en los delitos materia del presente trabajo de investigación, pues, de las búsquedas efectuadas y con los reportes que forman parte del presente –Anexo III– si bien en dicho reporte figuran hasta CUATRO supuestas sentencias por el delito de Homicidio Calificado por Lucro, al momento de revisarlas, cada una de ellas, se ha podido advertir lo siguiente:

MINISTERIO PÚBLICO	PODER JUDICIAL	MATERIA
1. 5073-2015	2015-8451-0	Homicidio Calf. por alevosía
2. 2683-2016	2016-5647-7	Homicidio Calif. por ferocidad
3. 6140-2016	2016-10633-0	Femicidio en Grado Tentativa
4. 1902-2016	2016-3521-0	Homicidio Calif. por ferocidad

Del recuadro planteado que antecede, podemos reiterar que lamentablemente en el Distrito Fiscal y Judicial de Lambayeque –Ministerio Público y Poder Judicial– no se ha venido aplicando el delito de Homicidio Calificado por Lucro; sin embargo después de la creación de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, inicialmente en la ciudad de Jaén –mediante Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 084-2014-MP-FN-JFS de fecha 16 de setiembre del 2014–, para luego ser trasladada a ésta ciudad de Chiclayo –mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2166-2016-MP-FN de fecha 10 de mayo de 2016–, el delito de Sicariato viene siendo aplicado imputándose sobre todo a las organizaciones criminales que viene siendo desbaratadas en ésta provincia de Chiclayo, conforme se puede apreciar del anexo IV del presente trabajo de investigación.

Sin embargo, también, ha de tenerse en cuenta que conforme el artículo 342° inciso 2 del Código Procesal Penal, que establece: “(...) 2. *Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de*

*ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, **el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria***” –modificación incorporada mediante Ley N° 30077 del 20/08/2013—. Entonces, dado que el plazo de la investigación preparatoria es de 36 MESES, que aplicado a las investigaciones actuales por Organización Criminal, llevadas a cabo en éste distrito fiscal (desde año 2016), la mayoría de estas, se encuentran en dicha etapa de investigación preparatoria y lo más avanzado que se habría llegado hasta la fecha de culminación del presente trabajo de investigación, sería la etapa intermedia (control de acusación); razón por la cual, a la fecha aún no se ha obtenido ninguna SENTENCIA que nos permita analizar su contenido, teniendo en cuenta la posición de la suscrita basada en la abundante jurisprudencia suprema nacional, que considera al delito de Homicidio calificado por lucro como Sicariato.

Todo lo antes expresado, nos permite señalar que, si bien aún no existen sentencias respecto a la imputación por el delito de Sicariato, y a pesar de la vigencia del delito de Homicidio calificado por lucro, tampoco se obtuvo sentencias sobre dicho delito en el período materia de investigación; no obstante ello, se asume la postura también que dada la vigencia del delito de Sicariato, ahora el delito de homicidio calificado de lucro podría tomar notoriedad, toda vez que la pena abstracta conminada para este delito es no menor a quince años, pena mucho menor a la conminada para el delito de Sicariato, que es no menor de veinticinco años de pena privativa de la libertad; todo lo cual generaría inseguridad jurídica en los órganos jurisdiccionales, toda vez, que la defensa técnica de los imputados por el delito de Sicariato, bien podrían cuestionar la calificación fiscal alegando que se trataría de la comisión del delito de Homicidio calificado por lucro, por cuanto, conforme al artículo 374° inciso 1 del Código Procesal Penal, incluso si el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los

hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad.

5.4. Seguridad jurídica.

5.4.1. Generalidades.

Todo Estado de Derecho implica un sistema jurídico que brinda a todos sus integrantes un mínimo de seguridad jurídica, donde todos y cada uno saben a qué atenerse en sus conductas, donde las instituciones y autoridades conocen de sus parámetros de actuación. Obviamente que esta legalidad, entendida como el conjunto de normas, lleva implícita una apreciación de justicia, sobre la cual se puede cuestionar su no cumplimiento en la realidad. En otras palabras, todo sistema jurídico implica un marco de seguridad jurídica, aun cuando la justicia sea sólo una aspiración. Por ello es que la lucha sigue siendo la justicia, a pesar de que el sistema ofrezca, ya, un mínimo de seguridad.

La doctrina (UNAV, 2014) enseña que la denominación de garantías se refiere a los contenidos concretos de la seguridad jurídica en materia penal. Se trata de consecuencias del sub principio de legalidad, que operan como garantías frente al ejercicio del *ius puniendi*. Dicho con otras palabras: frente al ejercicio del *ius puniendi*, el ciudadano cuenta con la protección (garantías) que deriva de la legalidad. Así, por ejemplo, sólo será lícito el recurso al derecho penal si es la ley la que define los delitos, y no el juez o el poder ejecutivo. En concreto, se habla de garantía criminal (el crimen o delito ha de estar definido en la ley), penal (la pena o sanción que corresponda al delito ha de definirse en la ley), jurisdiccional (el juez que conoce de la causa por el delito para aplicar sanciones, en su caso, ha de estar determinado por la ley) y de ejecución o penitenciaria (el cumplimiento de las sanciones ha de llevarse a cabo mediante el régimen legalmente establecido). De este modo, se evita la arbitrariedad que derivaría sanciones no previstas en la ley, o por comportamientos que no son delito, o mediante jueces y procedimientos no definidos en la ley, o ejecutadas al margen de la ley.

Con este enunciado se insiste en que la ley penal ha de reunir unas condiciones que hacen posibles las cuatro garantías en cuestión. En concreto se trata de que la ley define delitos, penas, el juez y el régimen de cumplimiento (las cuatro garantías, en definitiva) sea previa a la comisión del hecho. Se exige además que la ley sea cierta o precisa en la definición de los delitos, penas y demás garantías, toda vez que una indeterminación de esos contenidos harían vanas las garantías. Por ley escrita se entiende que el *ius puniendi* no tiene como fuente la costumbre, por lo que queda excluida ésta como fuente de delitos y penas. Finalmente, que la ley penal sea estricta significa que no cualquier ley escrita es fuente de Derecho Penal, sino que se suele exigir ley emanada del poder legislativo, puesto que también otras instancias (poder ejecutivo, por ejemplo) aprueban normas (que pueden englobarse bajo la denominación de legislación), y además con un cierto rango.

5.4.2. Análisis aplicado al tema materia de investigación.

La seguridad jurídica es el principio expresión de la libertad humana. Dicha idea significa que la persona – ser social y digno – es además libre, es decir, abierto y no predeterminado. La persona al actuar se rige por normas. Y la norma exige contar con la libertad del destinatario: un ser no libre no requiere normas susceptibles de cumplimiento o no, sus normas se cumplen inexorablemente. De este modo, la sociedad se debe proteger principalmente a través de prohibiciones (poder, en sentido normativo: no puedes hacer esto, porque está prohibido, por ejemplo, la prohibición de robar), y no solo por vías fácticas (poder, en sentido fáctico: no puedes hacer esto porque es imposible, por ejemplo, impidiendo físicamente llevarse algo mediante un candado).

Entonces, como principio que es, la seguridad jurídica entra en fricción y colisión con los dos principios restantes (necesidad y proporcionalidad), de donde surgen diversos sub-principios y después reglas más concretas. Así, como sub-principios se conocen el de sometimiento de la ejecución

mediante la Ley, en el que la seguridad prepondera sobre el de proporcionalidad; el de legalidad de delitos y penas, en el que es el de seguridad el que prepondera sobre el de necesidad; y el de aplicación de la ley mediante el proceso, en donde operan ambos de manera ponderada.

Ha de tenerse en cuenta que para garantizar los derechos y libertades de las personas es preciso que la protección de la sociedad se lleve a cabo sólo en el marco de un proceso, puesto que ello permite excluir o reducir las arbitrariedades. Se trata de asegurar el cumplimiento de las normas (seguridad jurídica), pero respetando la dignidad de la persona (proporcionalidad). Ambos principios operan de manera ponderada y equilibrada.

Ahora bien, en nuestro tema de investigación, la seguridad juega un papel preponderante, toda vez que consideramos que, en el período investigado - agosto 2015 a setiembre 2017-, en el distrito Fiscal de Lambayeque, se registraron un total de 32 investigaciones por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Homicidio Calificado por Lucro, de las cuales, 04 casos, han devenido en sentencias, por el referido delito; siendo que, a la fecha sólo existen 04 investigaciones en trámite, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Sicariato, y el resto de investigaciones, se encuentran archivadas, o por haberse iniciado antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, se encuentran con dictamen fiscal, conforme se graficará en los cuadros anexos.

Lo anterior, nos permite llegar a la conclusión que, aun en nuestro medio – Distrito Fiscal de Lambayeque–, si bien aún resulta incipiente la aplicación del artículo 108°-C del CP, ello se debe a que la reciente creación de las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada –año 2016–, las cuales realizando denodados esfuerzos por luchar contra el crimen organizado en nuestro distrito fiscal, pese a lo delicado y riesgoso de la función, pues a la fecha diversas organizaciones han venido siendo

desarticuladas con la realización de diversos operativos policiales, realizados en coordinación estrecha con el Ministerio Público, y los requerimientos solicitados al Poder Judiciales, a manera de ejemplo: “Los empresarios del norte” o “El nuevo clan del norte”, “Los wachiturros de Tumán”, “Los Charlys de Fanny Abando”, “Los sicarios de la Victoria”, entre otras.

Asimismo, la modernidad y crecimiento de la sociedad, ha conllevado pues a la creación de nuevas formas delictivas, y con ello también a que algunas personas que sin escrúpulos y con el afán de lograr riqueza a toda costa, sean capaces de eliminar a quien se interponga en su camino, es ahí que entra a tallar los “sicarios” o aquellas personas que son contratadas por quienes desean eliminar cualquier obstáculo que le impida conseguir sus fines lucrativos o cualquier otro beneficio, es así que los “sicarios” ofrecen sus “servicios” por una suma de dinero, poniéndole precio de esta manera a la vida humana, como si esta pudiera valuarse. Resultando entonces, que tanto el mandante como el ejecutor mismo, obtienen un beneficio ya sea económico, o de cualquier otra índole.

Entonces, lo antes señalado, nos lleva a continuar sosteniendo que el delito de “Sicariato” ha cobrado gran realce y envergadura como una forma delictiva que es tomada como una forma de vida, por aquellas personas que hasta se organizan para poder lograr su cometido; en consecuencia, la pena abstracta señalada en dicho delito, que va desde una pena no menor a veinticinco años hasta cadena perpetua, en sus formas agravadas, se condice con la acción típica descrita en el tipo penal *in comento*; siendo que por el contrario, la pena abstracta contenida para el delito de Homicidio Calificado por Lucro, no menor a quince años, resulta ser incluso beneficiosa, para quienes cometan la acción típica por móviles lucrativos, conllevando a que los operadores de justicia, específicamente, los abogados defensores, puedan alegar o sustentar la comisión del delito de Homicidio Calificado por Lucro y no de Sicariato y ello con la finalidad de lograr se imponga, por el órgano jurisdiccional, una pena más benigna.

Lo último mencionado, a su vez, nos lleva a inferir que, lo antes descrito generaría un escenario de inseguridad jurídica, en la administración de justicia, pues, el hecho concreto es que, los órganos jurisdiccionales tendrían que decidir si acogería o no la calificación jurídica planteada por la defensa técnica, para correrle traslado al Ministerio Público, y éste pueda exponer lo conveniente, incluso podría darse el caso, de que sin llegar al órgano jurisdiccional, en sede del Ministerio Público, el fiscal en virtud de la justicia negociada –Acuerdo de Terminación Anticipada– termine aceptando la calificación jurídica de Homicidio Calificado por Lucro, en lugar de Sicariato, que propondría la Defensa Técnica, con la finalidad de lograr una condena, que si bien efectiva, pero que partiría de una pena menor a quince años y no menor a veinticinco años de pena privativa de la libertad sobre la cual, se empieza a aplicar los descuentos por el beneficio solicitado –de terminación anticipada de proceso–.

El escenario planteado, podría constituir a la Seguridad Jurídica, que debe reinar en la recta administración de justicia, razón por la cual, se debe “cerrar cualquier ventana que quede abierta”, para que los criminales de hoy en día, puedan “cogerse” o “colgarse”, con la finalidad de salir, si bien no librados de una condena, pero sí, salir en el menor tiempo posible, después de haberle quitado la vida a un ser humano por un puñado de soles.

CONCLUSIONES

1. Culminada la presente investigación, podemos señalar, sin lugar a dudas que el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, ha sido nuevamente criminalizado con la dación del artículo 108°-C del mismo código sustantivo, que contiene el delito de Sicariato, conllevando con ello, a la creación de un problema de tipificación y de sanción a los órganos jurisdiccionales, generando inseguridad jurídica.
2. En suma que, conforme a la jurisprudencia citada, principalmente de la Corte Suprema de la República, pues lamentablemente en el Distrito Judicial de Lambayeque, antes de la vigencia del delito de Sicariato, el delito de Homicidio Calificado por Lucro no habría tenido mayor aplicación, por lo menos en el período investigado –agosto 2015 a agosto 2017–, dicha jurisprudencia suprema, ya se pronunciaba en el sentido de considerar al delito de Homicidio Calificado por Lucro como el delito de Sicariato.
3. En cuanto al delito de Sicariato, precisamente por ser la gran novedad de los últimos años – agosto 2015 – y con la creación de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, se ha venido dando mayor cabida al delito en mención, pues en la mayoría de las organizaciones criminales que se vienen investigando desde que se creó dicha fiscalía, se viene considerando como delito imputado, el de Sicariato, encontrándose pendiente de culminar las investigaciones, pues conforme lo establece el artículo 342° inciso 2 del Código Procesal Penal, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis (36) meses, pudiendo prorrogarse por un plazo igual, ante el Juez de la Investigación Preparatoria.

4. La presente investigación, nos ha llevado a continuar sosteniendo la posición de que el delito de Homicidio Calificado por Lucro, en esencia es el mismo que el delito de Sicariato, pues en ambas figuras delictivas, el sujeto activo, comete el asesinato o la muerte de su víctima a cambio de recibir una recompensa que en la mayoría de los casos, es económica, considerándose la existencia de un ejecutor y un mandante, esencialmente.
5. La jurisprudencia nacional que ha sido mencionada y analizada, en el presente trabajo de investigación, nos ha permitido colegir que, desde años anteriores (1999-2004), antes de la dación o entrada en vigencia del delito de Sicariato, ya se consideraba –o interpretaba– el delito de Homicidio calificado por lucro, como delito de sicariato.
6. Finalmente podemos concluir que, siendo el delito de Homicidio Calificado por Lucro, el mismo que el reciente incorporado delito de Sicariato, se propone la derogación del primero de los nombrados, a efectos de evitar que con ello se genere inseguridad jurídica en nuestros órganos jurisdiccionales, por cuanto, se podrían emitir decisiones contradictorias, en el sentido de que en algunos casos se aplique el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, en lugar del delito de Sicariato, previsto en el artículo 108°-C del citado código sustantivo, por contener el primero de los nombrados una pena más benigna –no menor a quince años–, que el segundo.

RECOMENDACIONES

1. Es evidente que, el delito de Homicidio Calificado por Lucro, previsto y sancionado en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal, al haber sido nuevamente criminalizado con la dación del artículo 108°-C del mismo código sustantivo, que contiene el delito de Sicariato, ambos tipos penales deberían ser analizados minuciosamente, a fin de determinar la derogatoria de uno de ellos, y así evitar la creación de un problema de tipificación y de sanción a los órganos jurisdiccionales, acarreando inseguridad jurídica.
2. Resulta necesario, que se analice el caso del delito de Homicidio Calificado por Lucro –previsto en el artículo 108° inciso 1 del Código Penal–, el cual al ser un tipo penal que no se vendría aplicando de manera efectiva en el distrito fiscal de Lambayeque, habría quedado desfasado y se habría dado cabida al delito de Sicariato, como se detalla en la recomendación siguiente.
3. En el caso del delito de Sicariato –previsto en el artículo 108°C del CP–, como gran novedad en nuestro catálogo punitivo, por haber sido incorporado mediante Decreto Legislativo N° 1181 inciso 1 publicado el 27 de julio de 2015, deberá aplicarse con sumo cuidado y de manera cautelosa, porque como bien sabemos, no sólo tiene que existir una imputación clara y detallada, sino que además debe probarse fuera de toda duda razonable que ello ha sucedido conforme al resultado de la investigación –esto es matar a una persona por encargo a cambio de un beneficio económico–, toda vez que podría resultar fácil capturar, procesar e incluso sentenciar al autor material del hecho, pero no sucedería lo mismo con el sujeto que contrata los servicios del sicario.

4. Se deben crear verdaderas políticas criminales con verdaderos estudios de campo, análisis estadísticos, detección de zonas de mayor índice criminal, entre otros aspectos, que conlleven a la objetiva creación de figuras delictivas por parte del Poder Legislativo o del mismo Poder Ejecutivo (por delegación de facultades), y con ello se logre la incorporación seria de las conductas delictivas en nuestro código penal, en virtud al Principio de Legalidad, que no respondan no sólo a la evolución de la sociedad, sino a un certero análisis de las conductas sociales que deban ser criminalizadas, lo que evitaría casos como el que ha sido materia de investigación, es decir, la doble criminalización del delito de Homicidio Calificado por Lucro con la dación del delito de Sicarito, por considerar de que se trata de la misma conducta delictiva.
5. Se sugiere que nuestra jurisprudencia nacional, consolide la decisión de considerar al delito de Homicidio Calificado por Lucro, como el delito de Sicariato, pues, a la fecha no se ha encontrado jurisprudencia contradictoria, sino todo lo contrario, ésta ha sido uniforme al considerar y analizar el mencionado delito de Homicidio Calificado por Lucro como el de Sicariato, y con ello se derive a una reforma legislativa de nuestro catálogo punitivo, como se detalla en la siguiente recomendación.
6. Conforme a la conclusión arribada, descrita precedentemente, consideramos que debe derogarse el artículo 108° inciso 1 del CP, en cuanto al término “lucro”, por cuanto, la experiencia durante su vigencia en el Distrito Fiscal de Lambayeque, ha demostrado su no aplicación efectiva, muy por el contrario a lo sucedido con el artículo 108°-C del CP, respecto al delito de Sicariato, pues con la creciente ola delincucional, éste viene cobrando mayor notoriedad, proponiendo el texto en la siguiente forma:

ARTÍCULO VIGENTE:

“Artículo 108.- Homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. *Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.*
2. *Para facilitar u ocultar otro delito.*
3. *Con gran crueldad o alevosía.*
4. *Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.”*

ARTÍCULO PROPUESTO:

“Artículo 108.- Homicidio calificado. *Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:*

1. *Por ferocidad, codicia, o por placer.*
2. *Para facilitar u ocultar otro delito.*
3. *Con gran crueldad o alevosía.*
4. *Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.”*

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- CASTILLO ALVA, J. L. (2010). DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL I. LIMA - PERÚ: GRIJLEY E.I.R.L. P. 7-9.
- CÓDIGO PENAL, (2017). CÓDIGO PENAL JURISPRUDENCIAL. LIMA – PERÚ. JURISTA EDITORES. P. 142-143.
- GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO y ROJAS LEÓN, RICARDO CÉSAR. (2017). DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL. LIMA: JURISTA EDITORES E.I.R.L. P. 473-475 y ss.
- HURTADO POZO, J. (1993). MANUAL DE DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL I, HOMICIDIO. LIMA - PERÚ: EDICIONES JUNS. P. 101-102.
- HURTADO POZO, J. (2011). MANUAL DE DERECHO PENAL - PARTE GENERAL - TOMO I. LIMA - PERÚ: IDEMSA. P. 224.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2004). DERECHO PENAL - PARTE GENERAL - TOMO I. LIMA - PERÚ: IDEMSA. P.57-58.
- PEÑA CABRERA FREYRE A. R. (2017). DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, LIMA – PERÚ: GACETA JURÍDICA. P.55-56.
- PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2016). CRIMEN ORGANIZADO Y SICARIATO - TRATAMIENTO PENAL DE LA DELINCUENCIA E INSEGURIDAD CIUDADANA. LIMA - PERÚ: IDEAS. P. 510-511.
- RANIERI, S. (1975). MANUAL DE DERECHO PENAL - TOMO V - PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR. BOGOTÁ: TEMIS. P. 314-315.
- SALINAS SICCHA, R. (2010). DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL VOL. II. LIMA - PERÚ: GRIJLEY. P. 44-45.
- SERRANO GOMEZ, ALFONSO y SERRANO MAÍLLO, ALFONSO. (2002). DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL. MADRID: DYKINSON - 7MA. EDICIÓN. P. 13, 37, 42-43.

- VILLAVICENCIO TERREROS, F. (PRIMERA REIMPRESIÓN AÑO 2017). DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL. LIMA - PERÚ: GRIJLEY. P. 203-204.

Revistas:

- MAGISTRATURA, A. D. (2014). DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD. TEMAS DE DERECHO PENAL ESPECIAL - http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/tema_dere_pen_espe/capituloI.pdf, p. 24.

Casos:

- CASO HUILCA TECSE Vs. PERÚ, SENTENCIA (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 3 de MARZO de 2005).

Lincografía:

- http://biblioteca.amag.edu.pe/cgi-bin/koha/opacsendbasket.pl?bib_list=18910/2001/#. Visitada en consulta los días 15, 16, 20 de febrero de 2018.
- <https://www.unav.es/penal/iuspoenale/lecciones/leccion3.pdf>. Visitada el día 2 de febrero de 2018.
- www.spij.com.pe . Visitada en consulta los días 26 – 28 de febrero de 2018.

FIRMA DE LA INVESTIGADORA

ANEXOS

ANEXO I

Crean fiscalías superiores supraprovinciales y provinciales en el marco de la implementación de la Ley N° 30077 que dispuso la entrada en vigencia a nivel nacional de Código Procesal Penal para delitos de crimen organizado RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS N° 084-2014-MP-FN-JFS

Lima, 16 de setiembre del 2014.

VISTOS y CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 30077, publicada el 20 de agosto de 2013, se dispuso la entrada en vigencia a nivel nacional del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, para delitos de crimen organizado que en esta se señala. Que, el artículo único de la Ley N° 30133, de fecha 19 de diciembre de 2013, modificó la Primera y Tercera Disposición Complementarias Finales de la Ley N° 30077, estableciendo que el 1 de julio de 2014, entrará en vigencia el citado código, para los delitos calificados como crimen organizado. Por lo que se hace necesario crear y delimitar la competencia de los nuevos despachos fiscales acorde con la nueva estructura de organización fiscal, aprobada mediante Acuerdo N° 457 de Junta de Fiscales Supremos, de fecha 04 de noviembre de 2004, en el marco del Decreto Legislativo N° 958. Que, por Decreto Supremo N° 230-2014-EF, de fecha 11 de agosto de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó las transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014, a favor del pliego del Ministerio Público, para la implementación de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado. Que, con el Informe N° 35-2014-MP-FN-ETI-NCPP/ST, de fecha 10 de setiembre de 2014, la Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, eleva a la Fiscalía de la Nación el diseño para la creación de plazas fiscales y Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de la implementación de la citada Ley N° 30077. Que, estando a la necesidad de creación de nuevos despachos y plazas fiscales, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, y en cumplimiento al Acuerdo N° 3583, adoptado por unanimidad en sesión extraordinaria en Junta de Fiscales Supremos de fecha 10 de setiembre de 2014.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear las siguientes fiscalías superiores: • Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada. • Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Segundo.- Crear las siguientes fiscalías supraprovinciales: • Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada. • Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Artículo Tercero.- Crear las siguientes fiscalías provinciales: • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Bagua, con sede en la ciudad de Bagua y con competencia en el Distrito Fiscal de Amazonas. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Abancay, con sede en la ciudad de Abancay y con competencia en el Distrito Fiscal de Apurímac, excepto las provincias de Andahuaylas y Chincheros. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Andahuaylas, con sede en la ciudad de Andahuaylas y competencia en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Cajamarca. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Huancavelica. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Huaura. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ica, con competencia en los Distritos Fiscales de Ica y Cañete. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Junín. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, con competencia en los

Distritos Fiscales de La Libertad y las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del Distrito Fiscal de Lambayeque. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en la ciudad de Jaén y competencia en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, con competencia en los Distritos Fiscales de Piura y Sullana. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Puno. • Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de San Martín - Tarapoto, con sede en la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín y con competencia en el Distrito Fiscal de San Martín. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Tumbes.

Artículo Cuarto.- Crear las siguientes fiscalías provinciales: • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa. • Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

Artículo Quinto.- Crear las siguientes fiscalías provinciales: • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Arequipa. • Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, con sede en la ciudad Juliaca, provincia de San Román y competencia en el Distrito Fiscal de Puno.

Artículo Sexto.- Crear las plazas fiscales para los Despachos Fiscales que se señalan en los artículos precedentes, así como en las fiscalías convertidas y fortalecidas; además, de las plazas de personal administrativo, confórmese detalla en los 05 Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Séptimo.- Facultar al Fiscal de la Nación para la distribución y/o redistribución de las plazas fiscales que conforman los Despachos creados en la presente resolución, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio.

Artículo Octavo.- Disponer que la Gerencia General del Ministerio Público adopte las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Huancavelica, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Sullana y Tumbes, Presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lima, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Huancavelica, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Sullana y Tumbes, Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA Fiscal de la Nación Presidente de la Junta de Fiscales Supremos.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 2166-2016-MP-FN

Lima, 10 de mayo de 2016.

VISTO: Los Informes N°s. 08 y 19-2016-2016-FSC-FECORMP-FN, cursados por el doctor Jorge Wayner Chávez Cotrina, Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada. **CONSIDERANDO:** Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 084-2014-MP-FN-JFS, de fecha 16 de septiembre de 2014, se crearon, entre otras, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, con competencia en el Distrito Fiscal de La Libertad y las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe del Distrito Fiscal Lambayeque; así como, la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en la ciudad de Jaén y con competencia en las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo. Que, mediante el Informe de Visto, el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, señala que en la ciudad de Chiclayo la delincuencia común se ha visto desplazada por el crimen organizado, puesto que se han detectado que cualquier acto delincuencia es planificado y coordinado por los integrantes de una organización con el líder de la misma, quien finalmente autoriza la comisión de éstos ilícitos; asimismo, señala, que existe falta de compromiso por parte de algunas instituciones, quienes impiden investigaciones eficaces y reservadas, lo que dificulta la lucha contra el crimen organizado; ello aunado a que, en la ciudad de Chiclayo no existe una Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, debiendo los Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, desplazarse constantemente desde la ciudad de Trujillo, hacia las provincias del Distrito Fiscal de Lambayeque, donde tienen competencia, lo que genera que los justiciables no tengan un acceso oportuno a una pronta administración de justicia. Por lo que, propone el traslado de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en Jaén, a la ciudad de Chiclayo, así como la incorporación de un Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a una Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada. Que, mediante Oficios N° 226-2016-FECORJ-MPFN/JFSMC y 01-2016-3°FPPC-CHICLAYO-4°DI/JMCM, se remiten los consentimientos de los Fiscales Titulares cuyas plazas serían trasladadas, conforme al pedido señalado en el párrafo precedente. El Fiscal de la Nación, es el titular del Ministerio Público, responsable de dirigir, orientar y reformular la política institucional, teniendo además como uno de sus principales objetivos, ofrecer a la sociedad un servicio fiscal eficiente y oportuno, permitiendo que los justiciables accedan a una pronta administración de justicia.

En ese sentido, es preciso señalar que debido al alto índice delincuencia registrado en la ciudad de Chiclayo, se ha verificado la necesidad de que dicha ciudad cuente con un equipo de Fiscales especializados en criminalidad organizada; por lo que, debe de dotarse de una Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, la cual deberá de ejercer competencia en todo el Distrito Fiscal de Lambayeque. Estando a lo expuesto, resulta procedente la solicitud de traslado de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en Jaén, a la ciudad de Chiclayo, la misma que modificará su denominación en Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo; asimismo, debe de disponerse el traslado de un Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, integrado por un (01) Fiscal Provincial y dos (02) Fiscales Adjuntos Provinciales, e incorporarse a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, con sede en Chiclayo; por otro lado, debe de modificarse la competencia de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad. Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Trasladar la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en Jaén, a la ciudad de Chiclayo, con todo su personal Fiscal y administrativo.

Artículo Segundo.- Modificar la denominación de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, con sede en Jaén, en Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo, la cual tendrá competencia en el Distrito Fiscal de Lambayeque.

Artículo Tercero.- Trasladar un Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, integrado por un (01) Fiscal Provincial y dos (02) Fiscales Adjuntos Provinciales, todos de carácter permanente, a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, ejerza competencia territorial en el Distrito Fiscal de La Libertad.

Artículo Quinto.- Facultar a las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lambayeque y La Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 77°, literal g del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 067-2009-MPFN, de fecha 23 de enero del 2009, disponga las medidas destinadas a regular la carga procesal de las Fiscalías Provinciales mencionadas en los artículos precedentes.

Artículo Sexto.- Dar por concluida la designación del doctor Juan Francisco Mogollón Castillo, Fiscal Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, sede Jaén, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4204-2015-MP-FN, de fecha 27 de agosto de 2015.

Artículo Séptimo.- Dar por concluida la designación del doctor Wilfredo Casas Ramírez, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, sede Jaén, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1650-2015-MP-FN, de fecha 06 de mayo de 2015.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación de la doctora Luzmila Paredes Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, sede Jaén, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3343-2015-MP-FN, de fecha 09 de julio de 2015.

Artículo Noveno.- Dar por concluida la designación del doctor Juan Manuel Carrasco Millones, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1539-2015-MP-FN, de fecha 27 de abril de 2015.

Artículo Décimo.- Dar por concluida la designación del doctor Germán Edgardo Montero Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2725-2012-MP-FN, de fecha 16 de octubre de 2012.

Artículo Décimo Primero.- Designar al doctor Juan Francisco Mogollón Castillo, Fiscal Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo.

Artículo Décimo Segundo.- Designar en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo, a los siguientes Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Especializados Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque: • Wilfredo Casas Ramírez • Luzmila Paredes Sánchez.

Artículo Décimo Tercero.- Designar al doctor Juan Manuel Carrasco Millones, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo.

Artículo Décimo Cuarto.- Designar al doctor Germán Edgardo Montero Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo.

Artículo Décimo Quinto.- Poner a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que extienda nuevos títulos de nombramiento a favor de los doctores Juan Francisco Mogollón Castillo, Fiscal Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque y Juan Manuel Carrasco Millones, Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, como Fiscales Provinciales Titulares Especializados Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque.

Artículo Décimo Sexto.- Poner a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que extienda nuevos títulos de nombramiento a favor de los doctores Wilfredo Casas Ramírez y Luzmila Paredes Sánchez, Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Especializados Contra la Criminalidad Organizada de Jaén, Distrito Fiscal de Lambayeque; y, Germán Edgardo Montero Ugaz, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal Corporativo de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque, como Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares Especializados Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, con sede en Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque.

Artículo Décimo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque y La Libertad, Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Fiscales de Lambayeque y La Libertad, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, Equipo Técnico de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a los Fiscales mencionados. Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE Fiscal de la Nación.

ANEXO III**REPORTE DE DELITOS REGISTRALES POR DISTRITO FISCAL**

del: 01/10/2015 al:19/09/2017

N°	N° Caso	Fecha Denuncia	Estado	Tío de Caso
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO				
1	240674501-2016-1645-0	06/04/2016	CON SENTENCIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
2	2406074501-2017-1140-0	14/03/2017	FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	DENUNCIA
			DELITOS(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE JOSE L. ORTIZ				
1	2406084501-2017-669-0	14/03/2017	FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
FISCALIA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE				
1	2406074502-2015-5073-1	01/02/2016	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITOS(S): CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	
			HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
2	2406074502-2015-5073-2	24/08/2016	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	
			HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
3	2406045600-2016-15-1	03/10/2016	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
4	2406074502-2015-5073-3	16/11/2016	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD	
			HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
5	2406045600-2016-15-2	28/11/2016	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
6	2406074503-2014-258-1	09/12/2016	CONSULTA RESUELTA	CONSULTAS
			DELITO(S): HOM.CAL. (FEROCIDAD O LUCRO)	
			HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
7	2405076001-2017-1-0	04/01/2017	RESUELVE EXCLUSION FISCAL	EXCLUSION FISCAL
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
8	2406045600-2016-15-3	14/03/2017	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
			C.P.P. (ASOCIACION ILICITA)	
9	2406045600-2016-15-4	25/04/2017	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
			C.P.P. (ASOCIACION ILICITA)	
10	2406045600-2016-15-5	08/05/2017	AUDIENCIA DE APELACION	APELACION DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
			C.P.P. (ASOCIACION ILICITA)	
02° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO				
1	2406074502-2015-5073-0	09/12/2015	CON SENTENCIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
2	2406074502-2016-2683-0	06/06/2016	CON SENTENCIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
			C.P.P. (ASOCIACION ILICITA)	
3	2406074503-2016-6140-0	23/11/2016	EN AUDIENCIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
4	2406074502-2017-4228-0	11/07/2017	FORMALIZA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	DENUNCIA
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	
02° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE JOSE L. ORTIZ				
1	2406084502-2017-887-1	10/04/2017	CON DICTAMEN	INCIDENTE-EXPEDIENTE
			DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	

02° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE

1	2406074502-2016-2683-1	17/10/2016	AUDIENCIA DE APELACION DELITO(S): CONTRA LA VIDA/EL CUERPO Y LA SALUD HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) C.P.P. (MARCAJE O REGLAJE)	APELACION DENUNCIA
2	240684501-2017-669-1	09/05/2017	AUDIENCIA DE APELACION DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) TERR (ASOCIACIÓN)	APELACION DENUNCIA

03° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO

1	2406074503-2016-1902-0	18/04/2016	CON SENTENCIA DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	DENUNCIA
2	2406074503-2016-3654-0	18/07/2016	CON ARCHIVO (PRELIMINAR) DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) ROBO AGRAVADO (MANO ARMADA) ROBO AGRAVADO (SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR, AUTOCAR)	DENUNCIA
3	2406074503-2016-3655-0	18/07/2016	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA DELITO(S): SICARIATO 1ER PARRAFO (MATA A OTRO POR ORDEN, ENCARGO)	DENUNCIA
4	2406074503-2016-1902-1	19/05/2017	CUADERNO EJEC. DE SENTENCIA DESARROLLAD DELITOS(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	EJECUCION DE SENTENCIA

03° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE (NCPP)

1	2406074503-2016-3655-1	13/02/2017	AUDIENCIA DE APELACION DELITO(S): SICARIATO 1ER PARRAFO (MATA A OTRO POR ORDEN, ENCARGO)	APELACION DENUNCIA
---	------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE (NCPP)

1	2406074503-2014-258-0	20/01/2014	EN CALIFICACION (CALIFICA) DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	DENUNCIA
2	2406045600-2016-3-0	04/03/2016	CON ARCHIVO (PRELIMINAR) DELITO(S): SICARIATO 2ER PARRAFO (ORDENA, ENCARGA, ACUERDA EL SI)	DENUNCIA
3	2406045600-2016-15-0	06/06/2016	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) C.P.P. (ASOCIACION ILICITA)	DENUNCIA
4	2406045600-2016-37-0	20/09/2016	CON INVESTIGACION PRELIMINAR DELITOS(S): HOMIC. CALIF. (FUEGO, EXPLO., VENENO U OTRO MEDIO QUE I) SICARIATO 3ER PARRAFO (EJECUCION INTERVIENEN DOS O M) V.L.P. SECUESTRO (COMETIDO POR DOS O MAS PERSONAS O) Y OTROS	DENUNCIA

FISCALIA PROVINCIAL MIXTA COORPORATIVA LA VICTORIA

1	2406094500-2015-3520-0	22/12/2015	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	DENUNCIA
2	2406094500-2016-2289-0	17/08/2016	CON ARCHIVO (PRELIMINAR) DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	DENUNCIA

FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE CAYALTI

1	2406104500-2015-1198-0	20/11/2015	CON ARCHIVO (PRELIMINAR) DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	DENUNCIA
---	------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------

FISCALIA SUPERIOR PENAL DE LIQUIDACION DE LAMBAYEQUE

1	2405076100-2016-5-0	04/03/2016	CON DICTAMEN DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) D.P.C. (FABR. SUMIN. POSES. DE EXPLOSIVOS)	EXPEDIENTE
2	2405076100-2016-17-0	07/03/2016	CON DICTAMEN DELITOS(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	EXPEDIENTE
3	2405076100-2016-34-0	09/04/2016	CON SENTENCIA DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER)	EXPEDIENTE
4	2405076100-2016-41-0	18/05/2016	CON SENTENCIA DELITO(S): HOMICIDIO CALIFICADO (FEROCIDAD, LUCRO O PLACER) HOMICIDIO CALIFICADO (GRAN CRUELDAD O ALEVOSIA)	EXPEDIENTE

ANEXO IV
**REPORTE DETALLADO DE CARGA FISCAL POR FISCALÍA
AL 23/02/2018 A HORAS 09:23 AM**
**MINISTERIO PÚBLICO
COR-LAMBAYEQUE(NCPP)
SGF**
**FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE(NCPP)**

Nº	Nº Caso	F. Denuncia	Etapa	Estado	F. Asignac.	F. Conclus.
Fiscal : CARRASCO MILLONES JUAN MANUEL (FECO-LAMB)						TOTAL: 10
EN TRAMITE						TOTAL: 7
1	2406045600-2018-7-0	25/01/2018		DENUNCIA PENDIENTE	25/01/2018	
2	2406045600-2018-8-0	30/01/2018		DENUNCIA PENDIENTE	30/01/2018	
3	2406045600-2018-10-0	12/02/2018		DENUNCIA PENDIENTE	12/02/2018	
4	2406045600-2018-13-0	22/02/2018		DENUNCIA PENDIENTE	22/02/2018	
5	2406075500-2017-369-0	30/11/2017		DENUNCIA PENDIENTE	19/02/2018	
6	2406045600-2016-15-0	06/06/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	06/06/2016	
7	2406045600-2016-39-0	04/10/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	04/10/2016	
RESUELTO						TOTAL: 3
1	2406074502-2015-2361-0	08/06/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-39-0	19/02/2018	19/02/2018
2	2406074503-2015-1661-0	14/05/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-39-0	03/10/2016	04/10/2016
3	2406075500-2015-232-0	03/09/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-39-0	19/12/2017	17/01/2018
Fiscal : CASAS RAMIREZ WILFREDO						TOTAL: 19
EN TRAMITE						TOTAL: 7
1	2406045600-2018-12-0	22/02/2018	CALIFICACION	EN CALIFICACION (CALIFICA)	22/02/2018	
2	2406045600-2017-16-0	03/07/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	03/07/2017	
3	2406045600-2017-32-0	24/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	24/10/2017	
4	2406045600-2017-35-0	29/11/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	29/11/2017	
5	2406045600-2018-9-0	08/02/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	08/02/2018	
6	2406045600-2015-1-0	23/09/2015	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	23/09/2015	
7	2406045600-2016-17-0	07/06/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	10/06/2016	
RESUELTO						TOTAL: 12
1	2406044501-2017-597-0	02/05/2017	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2017-13-0	05/06/2017	05/06/2017
2	2406074501-2017-1907-0	21/04/2017	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2017-14-0	05/06/2017	05/06/2017
3	2406045600-2016-35-0	22/08/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2015-1-0	10/10/2016	29/08/2017
4	2406045600-2016-29-0	01/08/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-35-0	10/10/2016	09/06/2017
5	2406045600-2015-5-0	14/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	14/10/2015	06/06/2016
6	2406045600-2015-8-0	23/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	28/10/2015	20/10/2017
7	2406045600-2016-6-0	30/03/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	30/03/2016	28/10/2016
8	2406045600-2016-11-0	27/04/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	08/06/2017	31/10/2017
9	2406045600-2016-31-0	05/08/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	05/08/2016	20/10/2017
10	2406045600-2017-1-0	03/01/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	04/01/2017	20/10/2017
11	2406045600-2017-13-0	05/06/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	05/06/2017	31/10/2017
12	2406045600-2017-14-0	05/06/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	05/06/2017	23/10/2017
Fiscal : CORDOVA SANTOS MIGUEL ANGEL						TOTAL: 12
EN TRAMITE						TOTAL: 9
1	2406045600-2016-51-0	16/12/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	11/07/2017	
2	2406045600-2017-26-0	25/09/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	25/09/2017	
3	2406045600-2017-27-0	27/09/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	27/09/2017	
4	2406045600-2017-28-0	19/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	19/10/2017	
5	2406045600-2017-33-0	30/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	30/10/2017	
6	2406045600-2017-34-0	24/11/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	24/11/2017	
7	2406045600-2017-39-0	19/12/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	19/12/2017	
8	2406045600-2018-1-0	03/01/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	04/01/2018	
9	2406045600-2018-6-0	22/01/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	22/01/2018	
RESUELTO						TOTAL: 3
1	2406044502-2017-862-0	08/06/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	04/07/2017	16/01/2018



**REPORTE DETALLADO DE CARGA FISCAL POR FISCALÍA
AL 23/02/2018 A HORAS 09:23 AM**

COR-LAMBAYEQUE(NCPP)
SGF

**FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE(NCPP)**

Nº	Nº Caso	F. Denuncia	Etapa	Estado	F. Asignac.	F. Conclus.
Fiscal : CORDOVA SANTOS MIGUEL ANGEL						
						TOTAL: 12
RESUELTO						TOTAL: 3
2	2406045600-2016-32-0	09/08/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	16/06/2017	30/11/2017
3	2406074502-2017-3276-0	06/06/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	19/12/2017	05/02/2018
Fiscal : JARAMILLO CUBAS LUIS						
						TOTAL: 8
EN TRAMITE						TOTAL: 6
1	2406045600-2017-29-0	19/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	19/10/2017	
2	2406045600-2017-36-0	01/12/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	01/12/2017	
3	2406045600-2017-3-0	12/01/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	11/07/2017	
4	2406045600-2017-18-0	18/07/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/07/2017	
5	2406045600-2017-21-0	09/08/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	09/08/2017	
6	2406045600-2017-25-0	20/09/2017	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	06/11/2017	
RESUELTO						TOTAL: 2
1	2406094500-2017-2963-0	19/09/2017	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2017-25-0	29/12/2017	17/01/2018
2	2406045600-2016-16-0	06/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	11/07/2017	25/06/2016
Fiscal : MOGOLLON CASTILLO JUAN FRANCISCO(FECCO)						
						TOTAL: 21
EN TRAMITE						TOTAL: 8
1	2406045600-2015-10-0	17/11/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	17/11/2015	
2	2406045600-2016-13-0	06/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	06/10/2017	
3	2406045600-2016-38-0	28/09/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	28/09/2016	
4	2406045600-2016-41-0	06/10/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	06/10/2016	
5	2406045600-2016-46-0	27/10/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	27/10/2016	
6	2406045600-2015-2-0	23/09/2015	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	23/09/2015	
7	2406045600-2016-19-0	09/06/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	10/06/2016	
8	2406045600-2016-50-0	16/12/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	19/12/2016	
RESUELTO						TOTAL: 13
1	2406044502-2015-1099-0	08/09/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-4-0	14/03/2016	15/03/2016
2	2406044501-2015-650-0	12/05/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-8-0	07/04/2016	07/04/2016
3	2406074503-2016-4987-0	27/09/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-50-0	02/06/2017	04/07/2017
4	2406074503-2017-1509-0	10/03/2017	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-50-0	25/05/2017	25/05/2017
5	2406045600-2016-1-0	20/01/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-8-0	10/10/2016	08/11/2016
6	2406045600-2016-4-0	08/03/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-8-0	08/03/2016	08/11/2016
7	2406045600-2016-9-0	12/04/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-8-0	12/04/2016	08/11/2016
8	2406045600-2015-6-0	14/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	14/10/2015	08/11/2017
9	2406045600-2015-7-0	14/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	14/10/2015	08/11/2017
10	2406045600-2016-3-0	04/03/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	04/03/2016	08/11/2017
11	2406045600-2015-9-0	13/11/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	13/11/2015	28/08/2017
12	2406045600-2016-2-0	25/01/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	25/01/2016	13/02/2017
13	2406045600-2016-44-0	24/10/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	25/10/2016	18/09/2017
Fiscal : MONTERO UGAZ GERMAN (FECO-LAMB)						
						TOTAL: 15
EN TRAMITE						TOTAL: 4
1	2406045600-2017-4-0	02/02/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	02/02/2017	
2	2406045600-2018-4-0	09/01/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	09/01/2018	
3	2406045600-2016-20-0	10/06/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	10/06/2016	
4	2406045600-2016-21-0	13/06/2016	ETAPA DE JUZGAMIENTO	EN AUDIENCIA	13/06/2016	



REPORTE DETALLADO DE CARGA FISCAL POR FISCALÍA

AL 23/02/2018 A HORAS 09:23 AM

JOR-LAMBAYEQUE(NCP)
SGF

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE(NCP)

Nº	Nº Caso	F. Denuncia	Etapa	Estado	F. Asignac.	F. Conclus.
----	---------	-------------	-------	--------	-------------	-------------

Fiscal : MONTERO UGAZ GERMAN (FECO-LAMB)

TOTAL: 15

RESUELTO

TOTAL: 11

1	2406045600-2016-28-0	26/07/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-20-0	26/07/2016	14/11/2016
2	2406074503-2014-258-0	20/01/2014	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-20-0	07/02/2017	04/10/2017
3	2406074503-2014-826-0	03/03/2014	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-20-0	02/12/2016	04/10/2017
4	2406084502-2015-1541-0	12/06/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-20-0	14/12/2016	03/10/2017
5	2406074502-2015-5344-0	28/12/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-28-0	26/07/2016	26/07/2016
6	2406045600-2016-27-0	25/07/2016	CALIFICACION	DERIVADO (CALIFICA)	25/07/2016	04/08/2016
7	2406074503-2016-3543-0	14/07/2016	CALIFICACION	DERIVADO (CALIFICA)	07/09/2017	09/01/2018
8	2406084501-2016-1165-0	13/06/2016	CALIFICACION	DERIVADO (CALIFICA)	19/09/2017	19/09/2017
9	2406094500-2017-1494-0	11/05/2017	CALIFICACION	DERIVADO (CALIFICA)	05/06/2017	06/10/2017
10	2406045600-2017-7-0	10/04/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	18/04/2017	19/01/2018
11	2406045600-2016-14-0	06/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	DERIVADO (PRELIMINAR)	15/11/2016	14/11/2016

Fiscal : PAREDES DELGADO ALDO

TOTAL: 15

EN TRAMITE

TOTAL: 10

1	2406045600-2018-11-0	21/02/2018		DENUNCIA PENDIENTE	21/02/2018	
2	2406045600-2017-30-0	20/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	20/10/2017	
3	2406045600-2016-37-0	20/09/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/11/2016	
4	2406045600-2016-43-0	24/10/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/11/2016	
5	2406045600-2016-48-0	16/11/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/11/2016	
6	2406045600-2016-52-0	19/12/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	19/12/2016	
7	2406045600-2017-8-0	18/04/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/04/2017	
8	2406045600-2017-20-0	07/08/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	07/08/2017	
9	2406045600-2017-38-0	19/12/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	27/12/2017	
10	2406045600-2017-5-0	15/02/2017	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	15/02/2017	

RESUELTO

TOTAL: 5

1	2406075500-2016-463-0	28/10/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-48-0	02/12/2016	02/12/2016
2	2406084501-2016-2129-0	23/09/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2017-5-0	07/02/2017	15/02/2017
3	2406094500-2016-2925-0	17/10/2016	CALIFICACION	DERIVADO (CALIFICA)	02/08/2017	02/08/2017
4	2406045600-2017-2-0	12/01/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	12/01/2017	22/02/2018
5	2406045600-2017-6-0	06/03/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	06/03/2017	07/09/2017

Fiscal : PAREDES SANCHEZ LUZMILA(FECCO-JAEN)

TOTAL: 10

EN TRAMITE

TOTAL: 4

1	2406045600-2017-22-0	31/08/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	31/08/2017	
2	2406045600-2017-23-0	31/08/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ASIGNADO PNP (PRELIMINAR)	31/08/2017	
3	2406045600-2016-8-0	07/04/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	18/02/2017	
4	2406045600-2018-5-0	12/01/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	12/01/2018	

RESUELTO

TOTAL: 6

1	2406044501-2015-1739-0	10/12/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-29-0	01/08/2016	01/08/2016
2	2406045600-2015-3-0	01/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	01/10/2015	08/11/2017
3	2406045600-2015-4-0	14/10/2015	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	14/10/2015	06/06/2016
4	2406045600-2017-12-0	24/05/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	ARCHIVO CONSENTIDO	24/05/2017	15/12/2017
5	2406045600-2017-10-0	15/05/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	15/05/2017	19/10/2017
6	2406045600-2017-31-0	20/10/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	20/10/2017	18/01/2018

Fiscal : RAMOS GAONA OMAR (FECO-LAMB)

TOTAL: 19

EN TRAMITE

TOTAL: 4

1	2406045600-2018-14-0	22/02/2018		DENUNCIA PENDIENTE	22/02/2018	
---	----------------------	------------	--	--------------------	------------	--



**REPORTE DETALLADO DE CARGA FISCAL POR FISCALÍA
AL 23/02/2018 A HORAS 09:23 AM**

JOR-LAMBAYEQUE(NCPP)
SGF

**FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE(NCPP)**

Nº	Nº Caso	F. Denuncia	Etapa	Estado	F. Asignac.	F. Conclus.
----	---------	-------------	-------	--------	-------------	-------------

Fiscal : RAMOS GAONA OMAR (FECO-LAMB)

TOTAL: 19

EN TRAMITE

TOTAL: 4

2	2406045600-2017-37-0	05/12/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	05/12/2017	
3	2406045600-2016-47-0	02/11/2016	INVESTIGACION PREPARATORIA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	02/11/2016	
4	2406045600-2016-45-0	25/10/2016	ETAPA INTERMEDIA	CON ACUSACION	25/10/2016	

RESUELTO

TOTAL: 15

1	2406045600-2016-26-0	25/07/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-15-0	25/07/2016	23/08/2016
2	2406084501-2015-1590-0	20/10/2015	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-15-0	23/08/2016	23/08/2016
3	2406074502-2016-2625-0	03/06/2016	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-24-0	27/06/2016	27/06/2016
4	2406074503-2017-3243-0	10/06/2017	CALIFICACION	ACUMULADO AL CASO 2406045600-2016-47-0	24/07/2017	28/09/2017
5	2406045600-2016-18-0	07/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	07/06/2016	25/08/2017
6	2406045600-2016-23-0	21/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	21/06/2016	28/08/2017
7	2406045600-2016-24-0	27/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	27/06/2016	21/11/2016
8	2406045600-2016-34-0	17/08/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	17/08/2016	09/05/2017
9	2406045600-2016-42-0	13/10/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	13/10/2016	05/05/2017
10	2406045600-2016-12-0	03/06/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	23/09/2016	17/05/2017
11	2406045600-2016-49-0	16/12/2016	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	19/12/2016	11/01/2017
12	2406045600-2017-9-0	18/04/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	18/04/2017	21/04/2017
13	2406045600-2017-11-0	16/05/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	16/05/2017	19/05/2017
14	2406045600-2018-3-0	09/01/2018	INVESTIGACION PRELIMINAR	CON RESERVA PROVISIONAL (PRELIMINAR)	09/01/2018	10/01/2018
15	2406045600-2017-24-0	07/09/2017	INVESTIGACION PRELIMINAR	DERIVADO (PRELIMINAR)	07/09/2017	28/09/2017

*F. Conclusión, es la fecha del trámite de cierre, en caso no registre se toma la fecha del acto con que se resuelve